

DOSSIER DE PRENSA



20/09/2018



Contenidos

1. General

19/09/2018	Jornada innovaplásticos Nota de prensa	1
------------	---	---

2. Medio Ambiente, seguridad, salud y sanidad

20/09/2018	El pasaporte al transporte limpio El Economista	2
20/09/2018	Respuesta responsable El País	3
20/09/2018	Avanzar con eficacia hacia la sostenibilidad Cinco Días	4
20/09/2018	Los edificios sostenibles, una inversión a largo plazo Expansión - Suplemento Especial Rebuild	5
20/09/2018	Todos contra la política antidiésel del gobierno La Razón - Suplemento Motor y Más	6
20/09/2018	La batalla contra el desperdicio de alimentos Expansión	8

3. Energía

20/09/2018	Moncloa insta a un Pacto de Estado para una reforma eléctrica histórica Expansión	9
20/09/2018	La UE decidirá en febrero si insta a parar el almacén de gas en Doñana Huelva Información	10
20/09/2018	Tasas, PPA y autoconsumo, más armas Expansión	11
20/09/2018	Energía suprime una tasa para frenar el alza de la luz La Vanguardia	12
20/09/2018	Urge evitar el resurgir del déficit de tarifa El Economista	13
20/09/2018	El Gobierno suspenderá la tasa a la generación para bajar la luz Expansión	14
20/09/2018	Un alivio en la luz para los consumidores El Mundo	15
20/09/2018	El impuesto más guerrero Expansión	16
20/09/2018	El Gobierno trata de amortiguar la subida de luz con menos impuestos El País	17

4. Ciencia Innovación y Tecnología

20/09/2018	Incorpora Econtrol, consultoría de I+D+i La Vanguardia	18
------------	---	----

5. Educación y RSE

20/09/2018	Investigación universitaria para soluciones reales La Vanguardia - Suplemento Monográfico Especial	19
20/09/2018	Desdichas universitarias El Mundo	20

6. Sectores y Empresas

20/09/2018	Una 'granja' de bacterias crea bioplásticos con los residuos orgánicos La Vanguardia - Suplemento Monográfico Especial	21
20/09/2018	Repsol se diversifica con sus gasolineras El Economista	23
20/09/2018	Iberdrola reclama al Gobierno que no penalice las renovables Cinco Días	24
20/09/2018	Alianza provechosa El Economista	25
20/09/2018	Cepsa tiene listo su debut en la Bolsa española para el próximo 18 de octubre Cinco Días	26

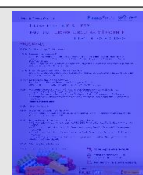
Nota de prensa

Fecha: **jueves, 20 de septiembre de 2018**

Fecha Publicación: **miércoles, 19 de septiembre de 2018**

Página: **1**

Nº documentos: **1**



Recorte en **color** % de ocupación: **100,00** Valor: **No disp.**

Tirada: **No disp.**

Audiencia: **No disp.**

Difusión: **No disp.**

Jornada #InnovaPlasticos

PlasticsEurope
Association of Plastics Manufacturers

SUSCHEM ES
Química Sostenible

INNOVACIÓN CON PLÁSTICOS PARA UNA EUROPA CIRCULAR Y EFICIENTE EN EL USO DE LOS RECURSOS

PROGRAMA

9:00 h. Registro y recepción de asistentes

9:30 h. **Bienvenida e Inauguración**

Javier Ponce, Director General del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial - CDTI

Juan Antonio Labat, Director General de la Federación Empresarial de la Industria Química Española - Feique

Teresa Riesgo Alcaide, Directora General de Investigación, Desarrollo e Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

9:45 h. **Innovación para crear valor social y económico**

Teresa Riesgo Alcaide, Directora General de Investigación, Desarrollo e Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

10:00 h. **Los Plásticos impulsan la innovación**

Ignacio Marco, Director General. PlasticsEurope o.r. España

Anne Chloé Devic, Innovation Manager. CEFIC & SusChem-Europa

10:30 h. **Mesa redonda:** Ecodiseño con plásticos: innovación impulsada por el ciclo de vida

- Envases: Adela Torres, Gerente de Medio Ambiente. Mercadona

- Automoción: Antonio Prunera, Head of Quality and Business Development. Elix Polymers

- Construcción y Edificación: Yolanda Martínez, Directora de Medio Ambiente y Certificación. Molecor

Moderador: PlasticsEurope

11:30 h. Café - Networking

12:00 h. **Oportunidades de Financiación CDTI**

M^a José Tomás, Departamento de Salud, Bioeconomía, Clima y Recursos Naturales. División de Promoción y Coordinación. CDTI

12:15 h. **Mesa redonda:** El futuro de las materias primas para plásticos

- Plástico reciclado como materia prima: RECICLEX. Roberto Gómez, Circular Economy Manager. Repsol

- CO₂ como materia prima: Benjamín Meseguer Vidagany, Head of Research & Development. Covestro

- Reciclado Químico: Sergio González, Cátedra de Medio Ambiente. Universidad de Alcalá de Henares

- Plásticos de origen renovable: Jordi Simón, Responsable de Plásticos Biodegradables. BASF

Moderador: SusChem - España

13:30 h. Clausura y Fin de la Jornada

* Al finalizar el acto se servirá un Vino Español



27 de septiembre de 2018



Salón de actos del CDTI

C/ Cid, 4 - 28001 Madrid



Registro online: suschem-es.org

colaboran:

feiQue





EL PASAPORTE AL TRANSPORTE LIMPIO



Jesús María Daza

Director general de 'Building Technologies' de Siemens España

Los numerosos desplazamientos en las grandes urbes causan desesperación a los ciudadanos. Afectan en gran medida a la calidad de vida y contaminan nuestras ciudades. ¿Cuántas veces hemos soportado atascos infinitos por no coger el metro en hora punta? Lamentablemente, no se ha inventado la capacidad de teletransportarse, pero sí que existen modalidades de transporte sostenibles que acortan los tiempos de espera y nos hacen la vida más sencilla.

Es necesario sensibilizar a la ciudadanía de los beneficios que una movilidad eficiente supone para el conjunto de la población. Y aunque la mayoría de las personas está a favor del transporte público o de formas de desplazamiento eficientes, cuando les preguntan si optan por ellos, son menos los que afirman hacerlo. Dicen que usar su vehículo propio les da mayor autonomía, comodidad y que reducen tiempos. Y en lo referido a automóviles eléctricos, hablan de falta de disponibilidad o de costes más elevados. La responsabilidad de las empresas que nos dedicamos a

mejorar la calidad de vida en las ciudades, como es el caso de Siemens, es derribar todos sus argumentos y proporcionar soluciones que cambien ese comportamiento para que la mayoría escoja un modo de transporte más eficiente y sostenible. Porque conseguir una movilidad más inteligente es fundamental para el futuro de las ciudades. Según datos del estudio *The Mobility Opportunity*, elaborado por Siemens y Credo, contar con un transporte más eficiente impulsaría el PIB de las principales ciudades en 119.000 millones de dólares y hasta los 238.000 millones de dólares para 2030.

Estamos inmersos en este cambio de paradigma, que, por supuesto, tiene mucho de concienciación, pero también mucho de tecnología e inversión. Hay que dirigir la sensibilización hacia la digitalización. Debemos entenderla como el pasaporte para conseguir un nuevo sistema de transporte eficiente, seguro y bien gestionado, donde los vehículos eléctricos sean las estrellas tanto de la red pública, como del uso privado. Y es que la tecnología es la única que puede aumentar el número de viajeros del transporte público. Iniciativas como la Semana Europea de la Movilidad, en la que estamos inmersos, contribuyen a hacerlo. Pero ¿en qué punto nos encontramos en España? ¿El vehículo tradicional sigue siendo el actor protagonista de nuestros desplazamientos o ha pasado a ser el

actor de reparto? La adopción de vehículos eléctricos privados en nuestro país va por buen camino. En 2017 se matricularon 13.021 coches eléctricos puros e híbridos enchufables, un 110,6 por ciento más que en 2016, según la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de Vehículo Eléctrico. Estos datos evidencian que la labor de concienciación sobre los automóviles de cero emisiones está calando en la sociedad, pero no es suficiente. Una de las mayores resistencias al cambio es la falta de disponibilidad de una red de recarga consistente y los elevados costes. En este sentido, será necesario facilitar ayudas por parte de las administraciones para que el precio de compra de vehículos y la implantación de las tecnologías no resulte tan elevado, la instalación de más puntos de recarga en los núcleos urbanos y, por supuesto, apostar por la tecnología para mejorar su rendimiento y seguridad.

Los pasos que estamos dando hacia la digitalización de nuestro transporte público están acabando también con el protagonismo del vehículo contaminante. Tal y como se extrae de la Estadística de Transporte de Viajeros del INE, en 2017 se mejoraron los datos en relación al 2016 y, este año, según las últimas cifras referidas al mes de julio, el número de usuarios del transporte público aumentó un 3,4 por ciento en este mes respecto al mismo perio-

do del año anterior. No obstante, hay que seguir invirtiendo. La cada vez mayor concentración de la población en los núcleos urbanos está multiplicando los traslados y provocando retrasos, averías o falta de disponibilidad.

La buena noticia es que ya existe la tecnología para combatir todos estos problemas. Hoy, gracias a sistemas automatizados ya se puede monitorizar la red de transporte y con herramientas digitales como *City Performance Tool* basadas en el análisis de datos y herramientas predictivas, se puede optimizar la gestión de numerosas variables que inciden en el normal desarrollo del tráfico o diversas incidencias que tienen lugar habitualmente en las ciudades, como los niveles de emisiones contaminantes, etc. De esta manera, se evita que el usuario tenga que sufrir demoras o incidencias; elija la mejor opción para su movilidad y la ciudad disfrute de un aire más limpio.

En definitiva, ya hemos tomado la salida correcta; aquella que nos conduce hacia una movilidad inteligente que acabe por completo con la contaminación y que otorgue al vehículo de cero emisiones el papel protagonista que tantos años lleva interpretando el clásico automóvil. Los ciudadanos y las empresas ya circulamos por esta autopista y, aunque nos llevará tiempo llegar a su meta, vamos en la dirección correcta.

Es necesario sensibilizar a la ciudadanía de los beneficios de la movilidad eficiente

La responsabilidad de las empresas es proporcionar las soluciones que las urbes requieren



Respuesta responsable

ANTXON OLABE

La alerta climática que vivimos exige que se forme un núcleo de responsabilidad estratégica ante la emergencia del planeta

A primeros de agosto, la prestigiosa revista norteamericana *Proceedings of the National Academy of Sciences* publicó uno de los artículos más importantes sobre el cambio climático de la última década. Los autores —Will Steffen, Johan Rockström, ambos del Instituto de Resiliencia de Estocolmo, y otros 16 expertos— son líderes mundiales en el debate científico sobre los límites ecológicos planetarios y pioneros en el estudio de los efectos de retroalimentación positiva del cambio climático. Su tesis central es que incluso en un escenario de limitación del incremento de la temperatura de 20 °C no puede descartarse un efecto dominó de las dinámicas de retroalimentación, efectos en cascada que podrían conducir a una desestabilización irreversible del sistema climático a largo plazo. El artículo supone una alerta climática en toda regla y cabe esperar que sus ecos lleguen hasta el informe especial que el IPCC presentará la primera semana de octubre. Y es que los borradores filtrados alertan de que, con la tendencia actual de las emisiones, el incremento de 1,5 °C en la temperatura media de la superficie de la Tierra se alcanzará a finales de la década de 2030.

La UE, consciente de las implicaciones de ese principio de realidad que llega desde la comunidad científica, ha tomado la decisión de actualizar su hoja de ruta para la descarbonización de la economía en el horizonte 2050. Esa mayor ambición se traducirá en el compromiso de lograr a mediados de siglo una economía neutra en carbono. Y es que del análisis realista y riguroso de la geopolítica climática a la luz de la experiencia de las tres últimas décadas se deduce que no es posible reconducir la trayectoria de las emisiones mediante una descarbonización masiva, acelerada y sistémica de la economía global, si la UE no persevera en su posición de compromiso y liderazgo, a la par que

configura con China un núcleo de responsabilidad estratégica hacia la crisis climática. Para el éxito de ese desempeño será preciso que ambas potencias atraigan con recursos económicos, tecnología y diplomacia a India, la mayor demografía mundial en 2030 con 1.500 millones de personas. En ese gran juego no se podrá contar, sin embargo, de forma estable con la Casa Blanca, si bien sí con la sociedad civil estadounidense, su comunidad científica y la mayoría de la América corporativa. Y es que el Partido Republicano ha sido capturado por las posiciones extremistas y anticientíficas de sus sectores más oscurantistas. En esas circunstancias, Europa es un actor crucial para proporcionar un nuevo impulso político al Acuerdo de París que se traduzca

denada de sus centrales de carbón están Reino Unido, Francia, Italia, Holanda Portugal, Austria y Finlandia.

Este es el contexto estratégico internacional que explica por qué el Gobierno socialista de Pedro Sánchez ha dado un paso al frente ante el cambio climático. El incremento de emisiones de nuestro país en 2017 ha sido del 4,46%, el mayor de todas las naciones industrializadas. Dicho aumento, el más elevado de los últimos quince años, se ha debido al aumento del consumo de carbón y gas en la generación eléctrica (el 56% de las emisiones totales del sector eléctrico en 2017 las ha generado la combustión de carbón). En esas circunstancias, el Ejecutivo se ha comprometido a presentar al Congreso de los Diputados un

La reconducción de la crisis climática requiere reducir para el año 2030 el 25% de las emisiones totales actuales de gases de efecto invernadero

en mayores compromisos nacionales de mitigación.

En términos concretos, la reconducción de la crisis climática requiere reducir para el año 2030 el 25% de las emisiones totales actuales de gases de efecto invernadero estimadas en, aproximadamente, 56.000 millones de toneladas de CO₂ equivalente. La única manera realista de aproximarse a ese nivel de mitigación es mediante la retirada masiva del carbón del sistema energético global (dicho combustible origina el 40% de las emisiones del sistema energético y el 25% de las emisiones totales mundiales). El *phase out* del carbón no es, en consecuencia, una ocurrencia de ecologistas exaltados sino la respuesta política (no retórica ni hueca) en defensa del bien común de la humanidad, no sólo de esta generación sino de las generaciones venideras. Así, entre los países de la Unión Europea que ya han aprobado un programa de retirada or-

ambicioso anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética antes de fin de año, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 que entregará a la Comisión Europea en esas mismas fechas, así como la Estrategia de Transición Justa para que el cambio de modelo energético se lleve a cabo de manera ordenada y solidaria. Considerados de forma conjunta esos compromisos políticos y normativos señalarán un punto de inflexión en la respuesta de España ante la crisis del clima, la principal amenaza sistémica que enfrenta el mundo y frente a la cual estamos “cerca de cruzar un punto de no retorno”, según ha manifestado hace unos días António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas.

Antxon Olabe Egaña es economista ambiental, ensayista y asesor en el gabinete de la ministra para la Transición Ecológica



Tribuna

Avanzar con eficacia hacia la sostenibilidad

Los impuestos al medio ambiente en España están por debajo de la media europea en relación al PIB



JOSÉ CARLOS ESPESO
Coordinador de movilidad sostenible de Calidad Pascual

Vivimos en un mundo semiconcienciado. Reciclamos, apagamos la luz cuando salimos de la habitación, cerramos el grifo al cepillarnos los dientes y usamos más el transporte público. Nuestra rutina medioambiental dista mucho de los hábitos de las generaciones anteriores, y sin embargo, haber batido en 2017 el récord de emisión de CO₂ de los últimos 800.000 años nos advierte de la urgencia por seguir mejorando. España es el cuarto país europeo donde más crecieron esas emisiones, un 7,4% en relación al año anterior.

Para contribuir a ese compromiso, la Comisión Europea impulsa desde 1999 la Semana Europea de la Movilidad, cuyo fin es sensibilizar al conjunto de la sociedad sobre los beneficios de una movilidad sostenible. La edición de este año introduce el concepto *multimodalidad*, la combinación de varias formas de transporte dentro de un mismo viaje; por ejemplo, viajar con la bicicleta en el metro o autobús para realizar viajes más largos sin necesidad de coger el coche. Como novedad, este año se suma como coordinador nacional el nuevo Ministerio de Transición Ecológica, que animará a participar tanto a entidades nacionales como a los ayuntamientos. El año pasado España fue líder en esta iniciativa, con 467 ciudades de un total de 2.526 urbes europeas.

En 2015 se celebró la Cumbre del Desarrollo Sostenible, en la que participaron 193 Estados miembros y se creó la Agenda 2030, cuando se deberán cumplir 17 objetivos de desarrollo sostenible. No solo pretenden la erradicación de la pobreza o el hambre, sino también preservar el medio ambiente y luchar



GETTY IMAGES

contra el cambio climático. En concreto, el objetivo 11º se centra en el impacto de la movilidad, para que las ciudades sean lugares seguros y sostenibles. Para lograrlo, se pretende proporcionar acceso a sistemas de transporte capaces de mejorar la seguridad vial y reducir el impacto ambiental de las ciudades.

Junto a los organismos públicos, las compañías juegan un rol clave en la consecución de dicho objetivo 11º; desde la promoción del transporte público y la bicicleta entre empleados, clientes y proveedores, hasta el fomento de

la utilización de vehículos de empresa con criterios de eficiencia energética. El margen de actuación es muy extenso y puede ampliarse más a través de la innovación y la tecnología.

Todas estas metas precisan de una legislación nacional que las avale para lograr verdadera eficacia. El nuevo Gobierno ha situado la política medioambiental entre sus prioridades, como certifica la creación del ya mencionado Ministerio de Transición Ecológica. Está desarrollando proyectos como la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, esencial para cumplir los compromisos del Acuerdo de París y de la Agenda 2030 contra el calentamiento global.

Se han anunciado también impuestos al CO₂, a los residuos tóxicos y a las bolsas y embalajes. En nuestro país, los impuestos medioambientales suponen un porcentaje bastante inferior a la media europea en relación al PIB. Con estos nuevos impuestos se estima que la recaudación fiscal verde podría incrementarse en 6.700 millones de euros. Además, será prioritario el de emisiones de CO₂, junto al que se estudia aplicar un fondo verde para impulsar la

eficiencia energética doméstica, bonificar el transporte público y crear préstamos a bajo interés para afianzar la movilidad sostenible.

A nivel provincial también se han desarrollado iniciativas para reducir las emisiones de CO₂ y promover el desarrollo y transporte sostenible, con especial acogida en Madrid y Barcelona. Ejemplo de ello es el *carsharing* eléctrico, que beneficia al medio ambiente y a los usuarios, al ofrecerles una alternativa para ahorrar en gastos fijos del seguro o el mantenimiento del vehículo propio.

El aumento de las iniciativas y de los ciudadanos participantes en ellas es un buen indicador para proteger y cuidar el entorno. No podemos relajarnos; el ciudadano de a pie y las corporaciones somos responsables tanto de los productos y servicios que consumimos como de los procesos de distribución que empleamos. Es de vital importancia que todos estemos alineados en la lucha por combatir una contaminación atmosférica que cada año afecta a millones de personas en todo el mundo. Es nuestro deber común completar la concienciación tanto como podamos.



Se han anunciado también tributos al CO₂, a los residuos tóxicos y a bolsas y embalajes



Los edificios acristalados son eficientes, pues favorecen la iluminación natural, pero es conveniente tener en cuenta que pueden presentar problemas de aislamiento. /SHUTTERSTOCK

MEDIO AMBIENTE Las viviendas y oficinas de consumo casi nulo requieren entre un 60% y un 80% menos de energía que las tradicionales y se alimentan, en gran medida, con fuentes renovables.

Los edificios sostenibles, una inversión a largo plazo

Noelia Marín. Madrid

Los edificios son responsables del 40% del consumo total de energía y del 36% de las emisiones de gases efecto invernadero en Europa. Con el objetivo de intentar frenar su impacto en el cambio climático, la Unión Europea ha dictaminado que, a partir del 31 de diciembre de este año, todos los edificios públicos de nueva construcción tienen que ser de consumo casi nulo, una normativa que se ampliará también a las viviendas privadas a finales de 2020. Así, España está pendiente de la inminente actualización del Código Técnico de la Edificación, donde el Ministerio de Fomento establecerá los requisitos mínimos de eficiencia energética que debe cumplir la edificación para adaptarse a esta nueva normativa marcada por Europa.

Se entiende por consumo casi nulo aquellos edificios altamente eficientes, que para funcionar requieren una cantidad muy baja de energía y ésta se cubre, en gran medida, por fuentes renovables. “Son construcciones que proporcionan confort por sí mismas, ni muy frías en invierno ni muy calurosas en verano, que aprovechan al

máximo la luz solar y evitan la infiltración excesiva de aire”, recalca Gerardo Wadel, director de I+D y Calidad del estudio La Casa por el Tejado, que participará como ponente en una de las conferencias organizadas con motivo de Rebuild.

Aunque estos edificios sostenibles pueden encarecer los costes de construcción entre un 10% y un 15%, el cliente final recupera el gasto entre los cinco y los diez primeros años de uso. “El promotor tiene que explicárselo al usuario y éste entender que está invirtiendo para ahorrar a través de sus facturas a largo plazo, durante toda la vida útil del edificio, y que, además, esa vivienda o esas oficinas se revalorizarán”, recalca.

Estas construcciones más responsables con el medio ambiente consumen entre un 60% y un 80% menos de energía que los edificios tradicionales. Pero, ¿cómo se consigue semejante ahorro? David Lanceta, consultor sénior de Energía en Arup España, recalca que es fundamental abordar el diseño del edificio desde un punto de vista interdisciplinar. Hay que cuidar desde la forma del bloque o su orientación hasta los materiales que se utilizan en su construcción.

Estas viviendas deben cumplir medidas pasivas como estar bien aisladas; tener iluminación natural; o ser estancas, es decir, estar selladas herméticamente, de forma que no se escape el aire de su interior. Además, es fundamental que incluyan sistemas activos eficientes. Esto se consigue, por ejemplo, a través de la sustitución de la caldera tradicional por una bomba de calor geotérmica –que

La iluminación natural, la estanqueidad y un correcto aislamiento son clave para ahorrar energía

El precio final del inmueble puede aumentar entre un 10% y un 15% por incluir sistemas de eficiencia

consume menos energía–; del uso de dispositivos que permiten reducir hasta cinco veces la pérdida de agua que se produce a través de los grifos; o mediante la inclusión de sistemas de iluminación eficiente.

“En una oficina, antes había ratios de iluminación de 12 o 15 vatios por metro cuadrado, ahora, con la tecnología LED, podemos lograr el mismo resultado con la mitad de consumo. De esa forma gastamos menos electricidad y ocasionamos menos problemas, porque las bombillas generan calor, y eso hace que aumente la temperatura del edificio”, ejemplifica Lanceta. Así, recuerda también la importancia de instalar sensores de iluminación natural. Estos dispositivos reconocen la cantidad de luz que hay dentro de la vivienda en cada momento y regulan automáticamente las lámparas para que proporcionen únicamente la claridad necesaria para cada tarea.

En cuanto a materiales, aunque las fachadas acristaladas son convenientes, sobre todo en oficinas, pues permiten la entrada de luz natural, hay que tener en cuenta que el cristal no aísla tanto como un muro, por lo que si no se busca una orientación adecuada para el edificio, puede que en verano haga demasiado calor y en invierno excesivo frío.

También conviene evitar, en la medida de lo posible, el uso de un material hasta ahora muy común en la

edificación española: el ladrillo caravista. Así lo asegura José María G. Romojaro, director técnico de Aedas Homes, quien hace hincapié en que su fabricación requiere un elevado consumo de energía y “proporcionan un aislamiento muy ineficiente”.

En cuanto a técnicas de construcción, destaca el uso de elementos industrializados, que pueden ensamblarse. “Es una forma de alargar la vida útil de las piezas. Así las puedes desmontar y volver a utilizarlas tantas veces como quieras”, reclama.

En ese sentido, los expertos recuerdan que la edificación sostenible no sólo consiste en reducir de manera considerable el consumo de energía de los edificios, sino también en utilizar siempre que sea posible materiales reciclados, potenciando así la economía circular en el sector.

Todas estas medidas de ahorro energético tienen que ir acompañadas, además, del buen uso de la vivienda. De nada sirve trabajar o vivir en un edificio preparado para ser eficiente si se olvida que, si hace calor, es mejor abrir la ventana que encender el aire acondicionado. “Los inmuebles son como los coches, puedes tener uno preparado para gastar poco combustible pero, si haces un mal uso, consumirás más”, añade Wadel.

Insiste, además, en la creciente importancia de rehabilitar el parque edificado ya existente. “Las acciones que podamos hacer en edificación nueva son mínimas respecto a la ya construida. En España hay 13 millones de edificios en pie, y la lentitud con la que estamos interviniendo hace que no vayamos a la velocidad que deberíamos para frenar el cambio climático”, reflexiona.



TODOS CONTRA LA POLÍTICA ANTIDIÉSEL DEL GOBIERNO

► Empresas y sindicatos critican duramente las medidas anunciadas por el Ejecutivo contra el gasóleo

► «Son perjudiciales para la industria, para el empleo y para los consumidores», coinciden Anfac y Comisiones Obreras



No entendemos las manifestaciones políticas en contra del diésel ya que no responden a la realidad actual de esta tecnología y son perjudiciales tanto para las ventas y los consumidores como para la consolidación y transformación tecnológica de las fábricas españolas y su liderazgo mundial». Estas declaraciones de la asociación de fabricantes de automóviles ponen de manifiesto el estupor que, en todo el sector del motor, han producido las declaraciones del Gobierno del socialista Pedro Sánchez en el sentido de subir las cargas fiscales sobre el diésel y todo el proceso de demonización de los automóviles con motores movidos a gasóleo.

Para los fabricantes con plantas de producción establecidas en España, estas declaraciones generan incertidumbre entre los ciudadanos y debilitan las ventas de vehículos diésel nuevos, cuando lo más eficaz, para desarrollar políticas medioambientales de verdadero impacto, sería actuar contra el parque automovilístico cada vez más envejecido. «El problema no es el diésel. Son los coches viejos que circulan por nuestras carreteras», destacó Mario Armero, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac).

RENOVACIÓN DEL PARQUE

La patronal del motor pide prudencia, ponderación y diálogo al Gobierno, además de un enfoque integral para el sector de la automoción que recoja una fiscalidad nueva y más verde que, al mismo tiempo,

fomente la renovación del parque; la armonización de las políticas de movilidad en todo el territorio español; el fomento del vehículo de cero o de bajas emisiones, además del apoyo decidido a las inversiones productivas, tecnológicas y de calado industrial.

Una posible subida de los impuestos al carburante diésel no puede estar justificada por sus emisiones contaminantes. Los vehículos nuevos diésel lanzan hasta un 84% menos de emisiones contaminantes NOx y un 90% menos de partículas que los automóviles de más de 15 años de antigüedad, tal y como se puede comprobar en el gráfico que incluimos en estas mismas páginas. La constante innovación tecnológica ha ayudado progresivamente a disminuir los límites de NOx y de partículas de los motores diésel hasta asimilarlos a los de gasolina. Los nuevos filtros de partículas, los catalizadores, la mejora de la aerodinámica y los sistemas de propulsión, entre otros sistemas, están contribuyendo, sin duda, a conseguir cada vez reducciones más voluminosas.

Además, gracias a las mayores exigencias introducidas por los nuevos reglamentos WLTP y RDE, las emisiones de los vehículos son más bajas, incluso en condiciones reales de circulación. Sin embargo,

los anuncios sobre el diésel generan incertidumbre entre los consumidores, tanto entre los que acaban de adquirir un vehículo diésel nuevo como entre los que piensan comprar uno. Este combustible ha perdido seis puntos porcentuales de cuota de mercado en lo que va de año. Pero, además, los recién comprados están disminuyendo drásticamente su valor residual, con el impacto negativo que este descenso tiene tanto en los particulares como en las empresas.

Este descenso de cuota revierte sobre todo en la compra de vehículos de gasolina, que han ganado casi cinco puntos porcentuales este año. El incremento de ventas de estos automóviles, con mayores emisiones de CO₂, impacta contra los objetivos de reducción de emisiones de CO₂ y dificulta la lucha contra el cambio climático, una de las metas claves expresadas por el Gobierno.

Estos vaivenes bruscos de la demanda afectan a las fábricas productoras de vehículos, que ensamblan más de 1,4 millones de vehículos diésel y dos millones de motores al año. Las líneas de producción españolas se adecúan con bastante flexibilidad a la demanda pero los picos impactan sobre su planificación, la amortización de sus inversiones y sus acuerdos con





EL VEHÍCULO NUEVO DIÉSEL

SUS EMISIONES CONTAMINANTES SON MUY BAJAS

Un diésel y un gasolina tienen los **mismos límites** en partículas y casi los mismos en NO_x



Respecto a vehículos de 15 años



El nuevo Diésel cumple con la última normativa sobre emisiones contaminantes de la UE



SON MÁS EFICIENTES

Consumen y emiten menos gases de efecto invernadero que los vehículos gasolina



Ayudan al cumplimiento de los objetivos establecidos por la Comisión Europea



INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA

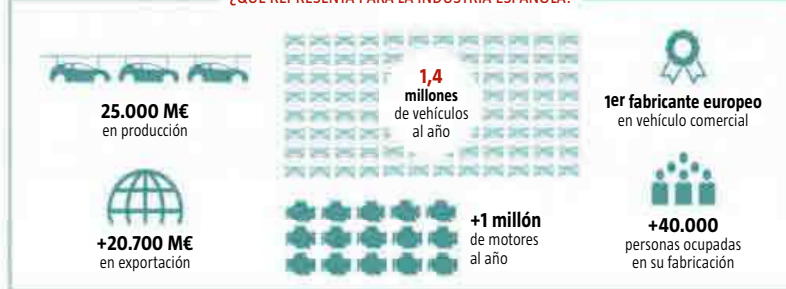
Inversión de los fabricantes en mejorar la tecnología (en millones de euros)



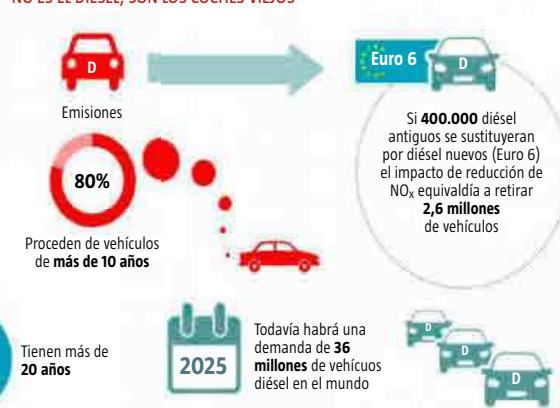
SON PARTE DE LA MOVILIDAD



¿QUÉ REPRESENTA PARA LA INDUSTRIA ESPAÑOLA?



NO ES EL DIÉSEL, SON LOS COCHES VIEJOS



Fuente: Anfac y statista

Infografía LA RAZÓN

proveedores, con la consecuente reducción de su competitividad.

Los fabricantes insisten en trabajar «en una transición adecuada y no forzada hacia la movilidad cero y bajas emisiones con políticas apropiadas y con plazos razonables». Así, el principio de neutralidad tecnológica, ampliamente compartido en la Unión Europea, es una herramienta clave para trabajar en la movilidad del futuro. Los sistemas de propulsión a base de combustibles fósiles mejoran cada día su impacto medioambiental. Además, la industria trabaja en la descarbonización del parque, con el desarrollo de nuevas tecnologías de combustión y vehículos alternativos. Son ambos desarrollos en paralelo los que supondrán una mejora en el impacto medioambiental de la movilidad.

En este sentido, España ha recibido, para los próximos dos años y medio, adjudicaciones de 15 nuevos modelos, de los que la mitad vienen con versiones alternativas (híbridos, eléctricos y gas). Si el mercado sufre distorsiones fuertes de la demanda, estos picos impactan en la planificación y producción de las factorías, lo que afecta a su competitividad presente y a su atractivo futuro. Es imprescindible, para trabajar en el desarrollo de la movilidad cero y bajas emisiones,

que se activen los programas Movalt y Vea y que se dinamice la figura del gestor de carga. De este modo, se estimulará la demanda de vehículo alternativo. «Un mercado fuerte, con cuotas de mercado de vehículos alternativos en crecimiento, y unas fábricas competitivas y flexibles, adaptadas a las nuevas tecnologías, reforzarán la presencia industrial de España y atraerán nuevos modelos a sus líneas de producción, que ya contarán con versiones alternativas y tecnologías de futuro», explicó Mario Armero.

CC OO TAMBIÉN

La iniciativa gubernamental ha contado, asimismo, con la oposición de los sindicatos. Comisiones Obreras afirma que la política anti-diésel del Gobierno no tiene solvencia y que generará una pérdida importante de tejido industrial y de puestos de trabajo. Para el sindicato lo prioritario es buscar fórmulas que acaben con la enorme antigüedad del parque automovilístico.

El Área de Estrategias Sectoriales de CC OO de Industria publicó el informe «Situación y perspectivas del sector del automóvil. Medidas ambientales, digitalización y automatización de la industria». Confirma que, con la posición del Gobierno en contra del diésel, será difícil generar un marco favorable que

expanda el sector de forma sólida, que favorezca la inversión en nuevas tecnologías y que avance hacia modelos más sostenibles y de mayor eficiencia.

El sindicato explica en el documento que lo que se necesita es un proyecto de descarbonización serio que afronte el cambio climático y sus efectos en la salud de las personas. Insiste en que el primer objetivo del Ejecutivo debería ser buscar fórmulas para eliminar la enorme antigüedad del parque automovilístico. El estudio también incide en los cambios que se están produciendo en el mundo por el desplazamiento del eje económico hacia la cuenca asiática del Pacífico. El 44% de la producción mundial de vehículos la asumen Europa, Estados Unidos y Japón, 14 puntos menos que en 2007. Solamente China fabrica el 30% del total.

El informe de CC OO de Industria recoge una amplia batería de datos. Consta que España mantuvo el pasado año su posición como octavo fabricante mundial de vehículos, pese a la ligera caída de la producción. Por tecnología, en el año 2017 los eléctricos representaron el 0,3% de la producción total, el de los híbridos el 0,08% y de gas natural un 0,2% del total. Ahora, en 2018, se fabrican 11.000 unidades eléctricas, pero ninguna es un turismo. En

matriculación de turismos, España, junto a Italia, fueron los países entre los grandes mercados europeos que mayor crecimiento obtuvieron. El primer semestre de 2018 cerró con un crecimiento del 10% del mercado de turismos. En agosto pasado aumentaron las ventas cerca de un 49%, por la oferta de stocks ante la entrada en vigor de la nueva normativa europea de emisiones (WLTP).

PIDEN MODERACIÓN

Sobre este tema, los presidentes de las cinco asociaciones de empresarios relacionados con el motor hicieron pública una carta en la que piden prudencia y moderación respecto al diésel ya que, afirman, «el diésel no contamina más que la gasolina y es el combustible más eficiente y con menores emisiones de CO₂». Comparados con vehículos gasolina equivalentes, los diésel nuevos presentan un consumo un 25% inferior y unas emisiones de CO₂ un 15% inferiores. Afirman que la automoción española está comprometida con la movilidad con cero y bajas emisiones, y piden que no se ataque ninguna tecnología ni se genere incertidumbre innecesaria porque ello puede afectar muy negativamente a las inversiones en nuestro país y al empleo directo e indirecto del sector.



LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, LA DISTRIBUCIÓN Y REPRESENTANTES DE TODA LA CADENA DE VALOR APOYAN LA 1ª SEMANA CONTRA EL DESPERDICIO ALIMENTARIO, IMPULSADA POR AECOC. LA INICIATIVA, QUE SE DESARROLLA LA PRÓXIMA SEMANA, INTENTA CONCIENCIAR AL CONSUMIDOR PARA QUE AYUDE A FRENAR EL PROBLEMA.

La batalla contra el desperdicio de alimentos

Ana Medina. Madrid

Cada año 7,7 millones de toneladas de alimentos terminan en la basura en España, lo que nos convierte en el séptimo país del continente que más comida desperdicia. La industria alimentaria, la distribución, las empresas de restauración y las organizaciones del sector primario y de consumidores unen ahora fuerzas para poner en marcha la 1ª Semana contra el Desperdicio Alimentario. La iniciativa, coordinada por Aecoc, asociación que agrupa a las empresas de gran consumo (más de 28.000 compañías que suponen cerca del 20% del PIB), se realizará durante la semana del 24 al 30 de septiembre en toda España, con el doble objetivo de poner en valor los alimentos y ofrecer información y recomendaciones al consumidor para que haga un buen uso de ellos, evitando así su desperdicio.

Durante siete días se desarrollarán diferentes actividades que pretenden luchar contra el desperdicio de alimentos, entre ellas, una gran campaña de información dirigida al consumidor y a la sociedad en general, tanto en puntos de venta (distribución, mercados municipales...) y locales de restauración, como en redes sociales y folletos de la industria y la distribución, centros de educación primaria y comedores escolares.

Con un 'hashtag'

Para ello, se ha elegido el hashtag #Alimentaciónsin desperdicio, con el que se quiere poner énfasis en la necesidad de que toda la sociedad se impli-



Dreamstime



La 1ª Semana contra el Desperdicio Alimentario se desarrollará del 24 al 30 de septiembre. Un tercio de la producción mundial de alimentos se desperdicia. España es el séptimo país de la UE que más comida tira (7,7 millones de toneladas al año)

Chefs como Juan Mari y Elena Arzak, Martín Berasategui o los hermanos Roca apoyan la iniciativa

persol o Vegalsa, entre otros), grupos de alimentación (como Calidad Pascual, Covap, Ebro Foods, Grupo Ribebro, Grupo Siro, Idilia Foods, Nestlé, PepsiCo, Pescanova o Unilever) y la restauración (Áreas, Europastry, Rodilla), de transporte (Convay) o de restauración colectiva (Serunion), además de patronales del sector de alimentación, las bebidas y la distribución y asociaciones de agricultores y consumidores y mercados.

Junto a ellos, grandes chefs

de la gastronomía española, como Juan Mari y Elena Arzak, Martín Berasategui, Pedro Subijana, Eneko Atxa y los hermanos Roca han decidido apoyar la 1ª Semana contra el Desperdicio Alimentario. Los restauradores se implicarán en la campaña con mensajes en redes sociales y, algunos, también en sus blogs, en los que darán consejos para el aprovechamiento de los alimentos.

Colaboración

Ante este problema (se calcula que se desperdicia un tercio de la producción mundial de alimentos, el 56% en países desarrollados), Aecoc comenzó a trabajar en 2012 en un proyecto destinado a evitar que los alimentos terminen en la basura a través de la colaboración de todos los actores implicados en la cadena (sector primario, industria, distribución, Administración y bancos de alimentos). Actualmente más de 450 empresas fabricantes y distribuidoras del sector de gran consumo, servicios logísticos y transporte apoyan el proyecto *La alimentación no tiene desperdicio*, una iniciativa pionera en Europa.

A través de la revisión de sus procesos productivos en busca de ineficiencias, poniendo el foco en sus sistemas de empaquetado o mejorando la información al consumidor, en estos siete años las empresas han reducido un 30% la cantidad de producto desperdiciado y han aumentado un 13% los artículos que, al no ser comercializados, se han donado a entidades benéficas.

¿Vuelta a los envases retornables?

El Gobierno trabaja en una hoja de ruta para reducir el consumo de plástico que incluye, entre otras medidas, valorar la implantación del sistema de depósito y devolución de envases (SDDR), evitar el uso excesivo de envasados o promover medidas para frenar los microplásticos o el abandono de basuras en el medio ambiente, terrestre y marino, según anunció la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Esta iniciativa fomentará la prevención en la generación de residuos y logrará cumplir los objetivos europeos hacia la economía circular, que los 28 apuntan como vector de modernización de la industria y de la economía. Entre las bases de esta estrategia figura trabajar por sectores "donde el problema es más definido" o con mayor incidencia en España, como el sector agrario, el sector hotelero o la industria. Según Ribera, cualquiera que hoy se haga un análisis de sangre tiene microplásticos en su cuerpo y considera que tanto productores como consumidores deberán acometer un cambio "importante" en su comportamiento.

HACIA UN NUEVO MODELO ENERGÉTICO

Moncloa insta a un Pacto de Estado para una reforma eléctrica histórica

PRECIOS/ El Gobierno lanzó ayer un órdago al PP y otros partidos y les exigió consenso para una “reforma estructural” y “global” eléctrica que acabe con los “inmensos” costes de un modelo de hace décadas.

Miguel Ángel Patiño. Madrid

Teresa Ribera, la ministra de Transición Ecológica, aprovechó ayer su comparecencia en el Congreso para explicar qué medidas iba a aplicar para frenar la actual escalada de los precios de la luz para apuntar más alto y plantear una “reforma estructural” de todo el sector eléctrico.

Más allá de un “plan de choque inmediato”, con medidas puntuales como la eliminación de la tasa a la generación eléctrica, la prolongación del bono social, la creación de otro bono para calefacción y la eliminación del impuesto al sol (ver información adjunta y en página 4), Ribera pidió “abrir un debate” para facilitar “la transición energética”, “recuperar la confianza de los inversores” y poder tener un mercado “más sencillo” y “transparente”.

Aunque no detalló propuestas concretas del PSOE, Ribera sí fue directa a los grandes problemas del sector eléctrico: el mercado mayorista, o *pool*, los sobrecostes distintos a la generación de luz (como los denominados pagos por capacidad o interrumpibilidad) y la fiscalidad del sector. Puso así al descubierto los cimientos sobre los que se ha descansado el sector desde su liberalización, en los años 90, y que para muchos es de donde arrancan los problemas estructurales.

Entre “lo viejo y lo nuevo”

El modelo actual, donde conviven “lo viejo y lo nuevo”, dijo Ribera, es de hace “dos décadas”. “Pudo ser adecuado en su día, pero ahora todo es distinto”, explicó la ministra antes de ir a la yugular: el mercado mayorista, o *pool*. El mercado mayorista es donde se negocia el precio diario de la luz y sigue un esquema marginalista. Es decir, la última central en entrar al sistema eléctrico para cubrir la demanda en cada momento –normalmente la más cara, de gas– es la que fija lo que cobran todas, que así se benefician de un sobreprecio.

La ministra consideró que el sistema actual del mercado

ALARMAS

La Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía (Aege) ha alertado de la amenaza que supone el encarecimiento de los precios eléctricos en los últimos días sobre la competitividad y para el conjunto de la economía del país.

Las centrales convencionales amortizadas se benefician del ‘pool’, según Teresa Ribera

eléctrico “no emite las señales adecuadas” y está recogiendo “el inmenso coste” de las tecnologías fósiles, como el carbón, por lo que “se debe de actuar”. Los precios del *pool* son responsables de cerca del 40% del recibo eléctrico. En la actual escalada de precios de la luz se ha justificado el incremento del *pool* por dispararse el precio de los derechos de emisión de CO₂. En el an-



Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, ayer en el Congreso.

terior pico, hace dos años, se atribuyó a la sequía y la escasez de energía hidráulica, que ahora hay de sobra.

‘Sin improvisación’

“Esta reforma debe huir de la improvisación”, dijo. “No podemos seguir poniendo parches que nos acaban pasando factura”, en clara alusión a las sucesivas medidas del anterior Gobierno del PP, primero

con José Manuel Soria como ministro y luego con Álvaro Nadal, todas ellas germen de interminables litigios en España y arbitrajes internacionales. Varias de ellas fueron remiendos al *pool* (eliminación de las subastas financieras paralelas, o Cesur, o creación de agentes de mercado para gas), pero no abordaron una reforma “global” para eliminar las distorsiones que, se-

La ministra pone en la diana el mercado mayorista y los pagos por capacidad e interrumpibilidad

gún Ribera, alimenta ese sistema. La más relevante es la de estar sobrepagando a centrales convencionales que en gran parte “están amortizadas”, mientras que la eólica y la solar están demostrando ser “más baratas”.

‘Nuevo diseño’

Con todo, se necesita “un nuevo diseño del mercado”, en el que el *pool* es uno de los pilares. También puso en la diana los pagos por capacidad, que cobran algunas centrales sólo por el hecho de estar disponibles, aunque no produzcan luz en ese momento, y los pagos por interrumpibilidad, que cobran algunas grandes empresas dispuestas a desconectarse de la red si hay sobrecarga, aunque no lo hagan. Ribera apuntó la posibilidad de crear subastas para los pagos por capacidad, como ya se ha empezado a hacer en interrumpibilidad.



VISITA DE LOS EUROPARLAMENTARIOS

La UE decidirá en febrero si insta a parar el almacén de gas en Doñana

● El jefe de la misión de la Eurocámara al espacio protegido garantiza su voluntad de “echar una mano” ● La Junta pide a la delegación un pronunciamiento “inequívoco” en contra del proyecto

Carlos Roche

El Parlamento Europeo decidirá en febrero si pide al Gobierno español que paralice el almacén de gas natural proyectado por Naturgy en el entorno de Doñana. Lo hará a partir de un informe elaborado con los datos recopilados en la visita que una delegación de la Eurocámara comenzó ayer para conocer la situación general del espacio protegido, sobre todo por la mencionada instalación industrial y la situación de los acuíferos que surten al parque natural.

En menos de seis meses la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo deberá votar un informe que estará elaborado, como muy tarde, en noviembre. El responsable de redactarlo es Pal Csaky, el parlamentario eslovaco del Partido Popular Europeo que dirige la misión enviada por Bruselas el pasado mes de marzo. Lo acompañan el diputado socialdemócrata griego Miltiadis Kyrkos y el austriaco Thomas Waitz, de los verdes.

“Queremos entender la situación y echar una mano”, aseguró Csaky después de reunirse con el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, que confía en que el posicionamiento de la Eurocámara esté alineado con el de la Junta: que el proyecto impulsado por Naturgy en el entorno de Doñana quede paralizado.

La petición de la Junta al Gobierno, antes de la moción de censura, era clara: hay que analizar el impacto ambiental de la instalación industrial de forma completa y no en los cuatro proyectos separados que presentó, en su momento, Gas Natural. Gracias a esa división la instalación Marismas Occidental —una de las cuatro fases— recibió la Declaración de Impacto Ambiental del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y también la Autorización Ambiental Unificada.

La Administración autonómica llegó incluso a plantear una reclamación judicial al Gobierno de Mariano Rajoy, pero la idea decayó cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa y Teresa Ribera se convirtió en ministra de Transición Ecológica. “Tenemos la misma visión”, zanjó Fiscal antes de explicar que, actualmente, tanto la Junta como el Ejecutivo nacional estudian cuáles son los pasos jurídicos a se-



PASCUAL

El europarlamentario Pal Csaky ofrece declaraciones a los medios de comunicación en presencia del consejero José Fiscal.

guir para poder paralizar el proyecto.

Lo que diga el Parlamento Europeo no es vinculante, pero sí importante. Lo reconoció ayer Marina Albiol, portavoz de IU en la Cámara de Bruselas. Ella no forma parte de la misión, pero estuvo ayer acompañando a Antonio Maíllo, que participó en la reunión que la misión de eurodiputados tuvo con los responsables de las quejas que han motivado la visita al espacio natural.

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, indicó a los periodistas que, tras remitir una carta a la comisión pidiendo que se produjera esta visita, la administración regional ha explicado a la delegación europea los pormenores de cada una de estas cuestiones, así como las actuaciones que la Junta lleva a cabo.

Fiscal fue taxativo al asegurar que ha solicitado “abiertamente” del Parlamento Europeo un pronunciamiento “inequívoco” en contra del gasoducto. “Mientras estemos aquí tendremos las herramientas suficientes como para que el proyecto no atraviese ni un metro de Doñana, que no se toca; he pedido que el Eu-

Visita al parque nacional antes de partir a Madrid

Mañana los eurodiputados podrán escuchar la versión del Ministerio de Transición Ecológica, cuya titular, Teresa Ribera, fue la responsable de la autorización ambiental de Marismas Occidental durante su etapa en el Gobierno de Zapatero. Antes, se llevarán una impresión directa del Parque Nacional de Doñana, donde pasarán toda la mañana de hoy guiados por los responsables de la EBD. Los eurodiputados se entrevistan con el vicedirector de Investigación de la Estación Biológica de Doñana, Jordi Figuerola, y con Francisco Manuel Alonso y Antonio Rodríguez de la Universidad de Huelva. Estarán también con agricultores para analizar la situación de los regadíos, pero el punto álgido de la visita será cuando se reúnan con los responsables del proyecto de Naturgy en la base donde la empresa energética realiza su actividad.

roparlamento se sume a la opinión prácticamente unánime de la sociedad andaluza”. “La impresión no ha sido mala”, apuntó.

No ha sido la cuestión del gas la única con la que el Ejecutivo autonómico se ha mostrado firme. En relación a la agricultura, ha explicado a los europarlamentarios que “para nosotros es un pilar fundamental en el en-

Lo que diga el Parlamento Europeo no es vinculante, pero sí importante

torno de Doñana”, si bien se apuesta por una actividad “racional, legal y sostenible”.

“Los esfuerzos de la administración desde que se aprobó el Plan de Ordenación de Regadíos de la Zona Norte de la Corona Forestal comienzan a dar frutos”, aseguró el titular andaluz de Medio Ambiente, que, con todo, admite que “probablemente podamos ir más rápidos”. Ha agregado que “con la agricultura ilegal seremos inflexibles, pe-

ro la legal, afortunadamente, es inmensamente mayor”.

Fiscal también recordó la creación de una comisión Gobierno-Junta, que se reunirá en unas dos semanas, para analizar jurídicamente el proyecto de gas, toda vez que la visión ambiental que ostenta el actual Ministerio para la Transición Ecológica “es la misma que la nuestra: ambientalmente entendemos que no es sostenible, pero hay un ordenamiento jurídico que cumplir y lo haremos con la máxima seguridad jurídica”.

La delegación de la Eurocámara se reunió ayer con el coordinador general de IU, pero también con el biólogo Javier Castroviejo, responsable de la queja más antigua registrada en Bruselas sobre Doñana. Data de 2009 y esta misión de investigación es resultado de su reclamación, a la que después se sumaron la federación de izquierdas, Mesa de la Ría y la plataforma Salvemos Doñana. Representantes de las tres organizaciones se reunieron ayer en Sevilla con los eurodiputados, así como los ecologistas de WWF y Ecologistas en Acción. La jornada finalizó con un encuentro con el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu.

Tasas, PPA y autoconsumo, más armas

M.Á.Patiño. *Madrid*
La suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, o Iypee, que implantó el PP en 2012 (ver información en página 4) es la medida más impactante a corto plazo del plan de choque del Gobierno contra la subida de la luz. Pero puede ser solo la punta del iceberg de una reforma más ambiciosa de toda la fiscalidad de la luz. La ministra Teresa Ribera se plantea introducir “coherencia en el sistema fiscal”. No concretó medidas, pero al poner ese asunto sobre la mesa airea uno de

los viejos fantasmas del sector. El mercado de la luz tiene tasas tan polémicas como el impuesto eléctrico que pagan los usuarios y sobre el que luego se cobra IVA (doble imposición).

Renovables por bandera
Ribera señaló también que es “contradictorio que los consumidores vulnerables paguen un IVA del 21% en la

El Gobierno quiere liberalizar al máximo el negocio de recarga de los vehículos eléctricos

tarifa eléctrica”. Sean medidas a corto plazo o a largo plazo, la ministra siempre enarboló la bandera de las renovables.

Ribera dijo que se modificará la Ley del Sector Eléctrico de 2013 para reconocer el derecho a autoconsumir sin cargos, el de compartir el autoconsumo y a simplificar los trámites administrativos para pequeñas instalaciones. Recuerda así el compromiso de eliminar el denominado *impuesto al sol*.

También apostó por “facilitar los contratos bilaterales”, los conocidos como PPA (Power Purchase Agree-

ment). Estos contratos, con los que una instalación vende su producción por adelantado, están proliferando como fórmula para financiar nuevas renovables. Ribera quiere que sirvan para “desplazar parte de la electricidad contratada en el mercado mayorista, o *pool*, a la contratación de renovables”.

Ribera también apuntó su intención de “regular ordenadamente el almacenamiento” de luz para conseguir precios de la electricidad estables y liberalizar al máximo la instalación de postes de recarga para vehículos eléctricos.



La ministra Teresa Ribera, junto a miembros de la comisión de Transición Energética

Energía suprime una tasa para frenar el alza de la luz

Ribera calcula que el ahorro será de entre el 2,5% y el 4%

ALICIA RODRÍGUEZ DE PAZ
Madrid

Mientras el precio mayorista de la luz registró ayer un nuevo máximo del año con 75,93 euros por megavatio hora, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, propuso un “plan de choque a corto plazo” para paliar el impacto en el bolsillo de los consumidores. Entre las medidas a adoptar “en las próximas semanas”, Ribera anunció la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica –“una reducción a tipo prácticamente cero”, puntualizó, sin eliminar la figura impositiva–. “Es la medida más acertada para lanzar una señal clara para paliar la factura del consumidor”, defendió Ribera ante la comisión parlamentaria de Transición Energética. Según explicó la ministra, este cambio fiscal puede suponer una rebaja de “entre el 2,5% y el 4% en la factura del consumidor doméstico y de un 5% a un 5,5%

La ministra de Transición Energética propone otra moratoria para renovar el bono social

para un consumidor industrial”.

Aunque el impuesto de generación del 7% fue implantado por el Gobierno de Mariano Rajoy en el 2012, ayer mismo el grupo parlamentario del PP presentó también una iniciativa para suspenderlo. Una medida apoyada por el resto de partidos del arco parlamentario.

Además de combatir el incremento del precio de la electricidad, la ministra avanzó también cambios para aliviar la situación de las familias amenazadas por la pobreza energética, que alcan-

za a 4,6 millones de personas. Así, anunció que “aplicarán ya” una mejora de la cobertura del bono social eléctrico, después de admitir que el actual modelo “no es suficiente”. Por ello, se comprometió a elevar “los límites de renta con derecho a descuento”, ofreciendo un mayor apoyo para los hogares “monomarentales” y aquellos integrados por personas mayores que viven solos. Según Ribera, en la atención de estos dos colectivos se tendrá en

cuenta el nivel de ingresos. Así mismo explicó que crearán un nuevo bono para la calefacción (“con una contribución directa”, “una especie de cheque”), que estará operativo este invierno.

También aseguró que contarán con la colaboración de los ayuntamientos y las oficinas de la Seguridad Social para “llegar masivamente” a los hogares susceptibles de beneficiarse de estos descuentos en la factura de la luz y de la calefacción. Y reconoció que plantearán una nueva moratoria más allá del próximo 8 de octubre, a menos de un mes de que venciera el plazo para renovar el bono social eléctrico. Según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, tan sólo 650.000 hogares se han ‘reenganchado’ al nuevo sistema de descuentos que gestiona cada compañía eléctrica, aprobado a finales del año pasado, frente a los 2,5 millones que eran beneficiarios del antiguo bono social.

En este paquete de “medidas de choque” incluirá también la supresión del denominado “impuesto del sol”. La futura modificación de la ley del Sector Eléctrico contempla –explicó Ribera– el reconocimiento del derecho al autoconsumo, a compartir la energía fotovoltaica generada así como la exención de figurar en el registro de la propiedad.

A medio plazo, la máxima responsable de Transición Energética prometió acometer una reforma “estructural” del sector energético, con la vista puesta en mejorar “el funcionamiento del mercado, dar coherencia al sistema fiscal y regular el almacenamiento”. Ribera confirmó además que van a desistirse en el recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional de la ley catalana contra el Cambio Climático. “Es un ejemplo de buen hacer”, defendió la ministra.●

Del 25% al 23% de impuesto para las pymes

■ El Ministerio de Hacienda estudia la posibilidad de plantear un descenso de dos puntos en el impuesto de sociedades para las pymes (del 25% al 23%) con una cifra de negocios inferior al millón de euros. La iniciativa sería bien aceptada por Podemos, formación que ha reclamado subir impuestos a las rentas muy altas y a las grandes corporaciones, al tiempo que un descenso para las rentas más bajas, los autónomos y las pequeñas y medianas empresas. Fuentes políticas han indicado la sintonía entre la titular de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique. Prueba de ello ha sido la decisión del Ejecutivo de aceptar un incremento de IRPF para rentas de más de 140.000 euros en el que inicialmente no creía.

El Gobierno presenta sus propuestas para paliar el alza del precio de la electricidad, ahora en máximos. La principal medida pasa por suprimir el impuesto del 7 por ciento sobre la generación. Se trata de un paso adecuado, ya que es bien conocido el gran peso que los tributos tienen en el recibo de la luz. De hecho, la supresión de este gravamen supone un abaratamiento del 3 por ciento para los hogares y del 5 por ciento para la industria. Ahora bien, los 1.500 millones que dejará de ingresar el sistema eléctrico pueden tener como efecto indeseado el resurgir del déficit de tarifa (la diferencia entre el coste reconocido y el real de producir electricidad). Es posible, por tanto, que se necesiten otras fuentes de ingresos para no reavivar un grave problema financiero.

El Gobierno presenta sus propuestas para paliar el alza del precio de la electricidad, ahora en máximos. La principal medida pasa por suprimir el impuesto del 7 por ciento sobre la generación. Se trata de un paso adecuado, ya que es bien conocido el gran peso que los tributos tienen en el recibo de la luz. De hecho, la supresión de este gravamen supone un abaratamiento del 3 por ciento para los hogares y del 5 por ciento para la industria. Ahora bien, los 1.500 millones que dejará de ingresar el sistema eléctrico pueden tener como efecto indeseado el resurgir del déficit de tarifa (la diferencia entre el coste reconocido y el real de producir electricidad). Es posible, por tanto, que se necesiten otras fuentes de ingresos para no reavivar un grave problema financiero.



HACIA UN NUEVO MODELO ENERGÉTICO

El Gobierno suspenderá la tasa a la generación para bajar la luz

GRAVAMEN DEL 7% La ministra Teresa Ribera anunció ayer la rebaja temporal del impuesto "hasta un tipo prácticamente cero", que reducirá la factura hasta un 4%.

Pablo Cereza. Madrid

El Ejecutivo "suspenderá temporalmente" el impuesto a la generación eléctrica. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, realizó ayer este anuncio en una comparecencia en el Congreso de los Diputados, en la que señaló que atacará la escalada del recibo de la luz en dos frentes: un plan de medidas urgentes para rebajar de manera "inmediata" la factura de la luz de los consumidores y un paquete de medidas para reformar a fondo el sistema eléctrico y reducir el precio de mercado de la luz.

Estas medidas tienen por objetivo "aliviar la factura del consumidor, que no puede ser quien afronte las turbulencias del mercado eléctrico". La ministra se refería así al hecho de que el precio de la luz alcanzó este martes los 75,93 euros por megawatio/hora, un 41% por encima del año anterior, y podría cerrar el mes con el mayor precio medio de la historia. Estas subidas se han debido al encarecimiento del petróleo, que ha arrastrado al carbón, y al gas y al alza de los derechos de emisión de CO₂, que las centrales contaminantes deben comprar para operar.

La ministra Ribera señaló ayer que la suspensión de este impuesto "es la medida más adecuada y acertada" para aliviar la escalada de costes. Este tributo recauda cada año entre 1.600 millones y 1.700 millones de euros y su suspensión abaratará la factura entre el 2,5% y el 4% para el cliente doméstico, y entre el 5% o el 5,5% para el consumidor industrial, según indicó Ribera en declaraciones a la prensa tras la comparecencia.

Para agilizar los trámites, Ribera evitó plantear la supresión del impuesto. En su lugar, se rebajará hasta un "tipo prácticamente cero", explicó. Con ello, no sólo se



El Gobierno flexibilizará la potencia contratada para evitar gastos innecesarios en el recibo.

asegura de que la medida supondrá una "bajada inmediata" del recibo eléctrico", por el menor coste que los productores de energía trasladarán a la cotización del mercado mayorista, sino que también facilitará la vuelta al tipo actual cuando remitan los precios.

Esta rebaja, que tendrá lugar "hasta que se defina una

propuesta de reforma fiscal más global", tendría también el respaldo del PP, que antes de la comparecencia de la ministra había anunciado la presentación de una proposición de Ley en el Congreso en esta línea. De hecho, el portavoz adjunto este partido, Guillermo Mariscal, abogó ayer por eliminar definitivamente el gravamen.

Por otra parte, la ministra de Transición Ecológica anunció medidas concretas para proteger al consumidor doméstico. Entre ellas, destaca la flexibilización de la potencia contratada, así como una mayor información, para evitar que los clientes tengan que pagar por los gastos derivados de una potencia superior a la necesaria.

El recibo caerá hasta un 4% para el cliente doméstico y un 5,5% para la industria

A FONDO | ENERGÍA El autor aboga por suprimir el impuesto de generación y alerta del aumento de los precios de la electricidad. Propone no incurrir en costes innecesarios en el sistema eléctrico y trasladar las ganancias de eficiencia a los usuarios.

Un alivio en la luz para los consumidores

ALBERTO NADAL

DESDE COMIENZOS del verano los precios del mercado eléctrico han experimentado un fuerte aumento. Este crecimiento de los precios de generación de energía eléctrica está impactando de forma importante en el recibo de los consumidores domésticos, así como en la capacidad de competir y de crear empleo de nuestras empresas, especialmente, las industriales para las que una energía barata es un elemento esencial.

El crecimiento de los precios de generación de energía eléctrica está teniendo, además, otra consecuencia: aumentan los ingresos públicos que proceden de los consumidores, tanto los tributarios, como los asociados a las de derechos de CO2.

«Hay fuentes de financiación alternativas procedentes de la propia elevación del precio de la electricidad»

Así, por un lado, la subida del precio de la electricidad en el mercado eléctrico trae consigo un incremento muy notable de la recaudación de impuestos asociada al precio de la electricidad. La electricidad que consumimos paga tres impuestos y todos ellos, independientemente de quién esté obligado al pago, terminan aumentando el precio que pagan los consumidores en el recibo eléctrico. Por una parte, los generadores están obligados a pagar el impuesto de generación, que supone un 7% del valor de la energía que venden en el mercado, y que naturalmente repercuten en el precio al que

ofertan esta energía. Los consumidores pagan, además, otros dos impuestos: el impuesto especial sobre el consumo de electricidad y el impuesto de valor añadido. Ambos se establecen sobre las cuantías totales giradas en el recibo eléctrico. Por tanto, cuando se incrementa el coste de generación, como está ocurriendo ahora, más se recauda por cada una de estas figuras tributarias, lo que aumenta el volumen de ingresos tributarios procedentes de los consumidores eléctricos.

Pero, además de los tributarios, los ingresos públicos derivados de las subastas de derechos de CO2 también se están incrementando: para producir energía eléctrica con fuentes emisoras de CO2 (carbón o gas natural), las empresas generadoras deben comprar derechos de emisión en el mercado europeo. El precio de estos derechos se ha multiplicado por cuatro en el último año, lo que ha traído consigo un incremento de este tipo de ingresos que previsiblemente estará por encima de los 1.500 millones de euros anuales.

En un momento como el actual, en el que se está debatiendo el tamaño del gasto público y su financiación a través de mayores impuestos, la pregunta que debemos hacernos es qué va a hacer el sector público con este fuerte incremento de ingresos asociado a la subida del precio de la electricidad que están pagando los consumidores. Así, como vemos, por un lado, el precio está subiendo, en parte, porque están subiendo los derechos de CO2 pero los ingresos procedentes de esos derechos los está recibiendo el Estado; por otro lado, el incremento del precio de la electricidad también está aumentando notablemente la recaudación de las tres figuras tributarias mencionadas. Estos ingresos extra el Gobierno puede dedicarlos a financiar más gasto público, seguramente, con el objetivo último de mantener en pie una imposible coalición parlamentaria o, por el contrario, destinarlos a aliviar el incremento del precio de la electricidad y contribuir de esta manera a la competitividad, al crecimiento y a la creación de empleo.

Ha llegado el momento de utilizar estos ingresos extraordinarios para eliminar el impuesto de generación eléctrica. Este impuesto, que surgió durante la crisis, tenía como finalidad ayudar a sufragar algunos de los costes del sistema eléctrico. Sin embargo, hoy existen fuentes de financiación alternativas procedentes de la propia elevación del precio de la electricidad como acabamos de ver, y que el consumidor eléctrico ya está pagando. Por ello, lo económicamente sensato es eliminar el citado impuesto de generación que re-

duciría el coste de producción de energía eléctrica un 7%, y se traduciría en una rebaja de más del 3% en el recibo final de empresas y consumidores. Esto supondría un alivio para las familias, que pagarían un poco menos en el recibo eléctrico y también para las empresas, especialmente, aquellas que son grandes usuarias de electricidad y que deben competir en los mercados internacionales, así como para las empresas generadoras que mejorarán su situación competitiva frente a las de otros países europeos.

EL IMPUESTO de generación recauda al año unos 1.700 millones de euros pero los incrementos de ingresos por derechos de CO2 e impuestos supera con creces esa cifra. 1.700 millones cuyo mejor destino es devolvérsele en forma de rebaja impositiva a los consumidores de electricidad.

Es por ello que el Partido Popular anunció el lunes pasado, por voz de su secretario general, una Proposición de Ley cuyo contenido esencial es la reducción a tipo 0 del impuesto de generación eléctrica y la compensación al sistema eléctrico de esta reducción a través del incremento de las aportaciones al mismo median- te los derechos de CO2.

Esta propuesta va en línea con lo que es el elemento central de la política energética del Partido Popular: no incurrir en costes innecesarios en el sistema eléctrico y trasladar las ganancias de eficiencia a los consumidores; todo ello con el fin último de tener una economía más competitiva y capaz de crear más empleo. Así, tras la reforma eléctrica de 2013 todos los años se han congelado o reducido los peajes eléctricos. Ahora es el momento de actuar sobre la parte impositiva aligerando carga fiscal para los consumidores en vez de destinarlo a un gasto público que viene determinado por la debilidad parlamentaria del Gobierno.

Esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular fue registrada ayer por la mañana en el Congreso de los Diputados, seis horas antes de que la ministra de Transición Ecológica anunciara una medida idéntica en su comparecencia en Comisión. Parece que la cultura del plagio se extiende en el Ejecutivo socialista.

Alberto Nadal es secretario de Economía y Empleo del Partido Popular.

«La iniciativa del PP fue registrada seis horas antes de que la ministra anunciara una medida idéntica»

El impuesto más guerrero

ANÁLISIS

por Miguel Ángel Patiño

El Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) ha sido fuente inagotable de disputas políticas, empresariales y judiciales antes incluso de nacer en 2012. Y lo sigue siendo ahora, durante su muerte, seis años después. El impuesto fue una iniciativa del ex ministro de Industria, José Manuel Soria, dentro de una batería de medidas para taponar el déficit de tarifa eléctrica, un agujero que se había creado durante más de una década porque los precios de la luz estaban por debajo de los costes.

El impuesto, que nació siendo un 6% de gravamen a las eléctricas por toda su producción, preveía recaudar 1.260 millones de euros anuales, y creó una bronca disputa entre Soria y el entonces ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, que lo veía co-

mo una injerencia en su territorio. Cuando finalmente se aprobó, el impuesto pasó a ser un 7%, y la recaudación más de 1.500 millones anuales. Las eléctricas no tardaron en llevar esa norma del PP a los tribunales, e incluso se sumó alguna Comunidad, como la Junta de Andalucía, del PSOE. Recurso tras recurso, el caso fue enredándose: Audiencia, Supremo e incluso Constitucional, donde se puso de manifiesto el rifirrafe jurídico sobre la constitucionalidad o no de esa tasa.

El IVPEE, que sigue coleando en el Supremo, y que ya ha supuesto un impacto de 7.000 millones para el mercado eléctrico, que han terminado pagando todos los usuarios, fue ayer objeto de una grotesca carrera política entre PP y PSOE por colgarse la medalla de su anulación. Minutos antes de que el PSOE anunciara su abolición, el PP, que fue el que lo creó, se apresuró a presentar una proposición de ley para eliminarlo.



El Gobierno trata de amortiguar la subida de luz con menos impuestos

MIGUEL ÁNGEL NOCEDA, Madrid
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció ayer que el impuesto de generación, instaurado por el Ejecutivo del PP y que grava con un 7% la producción eléc-

trica, será suspendido para abaratar el precio de la electricidad. Este gravamen, aunque se aplique a las eléctricas, repercute directamente en el recibo final que paga el consumidor. La ministra también adelantó que el Go-

bierno facilitará el acceso al bono social, que será complementado con un nuevo bono para la calefacción, y, además, pondrá en marcha unas medidas de choque para avanzar en la transición energética.

El anuncio del Gobierno llega en plena escalada de precios en el mercado mayorista. Aunque no se ha llegado a cotas históricas, en lo que va de septiembre supera una media de 70 euros el megavatio-hora. La suspensión del impuesto de generación —el responsable de Economía del PP, Alberto Nadal, había asegurado el martes que también preparaba un proyecto de ley para anularlo— supondrá una rebaja entre el 2% y el 4% en el recibo de los consumidores domésticos y entre el 5% y el 5,5% en la industria.

Durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados, Ribera resumió su programa en tres objetivos: facilitar la transición energética, hacer recuperar la confianza para atraer nuevas inversiones y construir un mercado estable. La ministra reconoció que el sistema adolece de debilidades y que no se puede seguir poniendo parches. Por eso, aseguró, es necesario “aprovechar la tecnología” con la que se cuenta.

Además de suspender el impuesto a la generación, Ribera anunció que el Gobierno facilitará las condiciones para que los consumidores vulnerables accedan al bono social, que será complementado con un nuevo bono para la calefacción, además de poner en marcha medidas de choque para descarbonizar y mejorar la eficiencia energética. Tales como potenciar el autoconsumo y mejorar el acceso a las inversiones en renovables.



El diputado de PDeCAT, Carles Campuzano, saluda a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. / L. S.

Según la ministra, las medidas serán presentadas al Consejo de Ministros en una de las próximas reuniones. Las que se consideren maduras se adoptarán de forma inmediata. La primera concreción, por tanto, parece la de la suspensión del impuesto a la generación, que responde a la controversia que se produce en la formación de la factura, que la ministra ha criticado frontalmente. En la actualidad, el 50% procede del coste de financiación de infraestructuras, pe-

jes y otros factores ajenos al negocio y un 22% de tributos, quedando sólo el 28% correspondiente al consumo.

Las medidas de choque para “descarbonizar y mejorar la eficiencia energética y electrificar la economía” tienen el objetivo de alcanzar el 32% de renovables en 2030, ha añadido la ministra.

Para ello es preciso “solventar las barreras existentes” y hacer un calendario estable para las subastas de nuevas inversiones. Por otra parte, Ribera ha insi-

do en la necesidad de respaldar el autoconsumo, sobre todo el compartido, y ha anunciado la modificación de la Ley del Sistema Eléctrico, que completará con el derecho a almacenar y el derecho de compartir.

Ribera subrayó que “urge una reforma” para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, cuyos precios se han disparado, y ha comentado que una inversión de 100.000 millones para descarbonizar este sector ahora permitirá ahorrarse 400.000

Un ahorro mínimo en el recibo

El impuesto de generación que ahora va a anular el Gobierno se le aplica a las eléctricas, pero estas lo repercuten en el consumidor final. El gravamen afecta, sin embargo, solo al término de consumo, equivalente a un tercio del recibo, y solo a los usuarios acogidos a la tarifa regulada (PVPC). El resto del importe es fijo y lo conforman peajes e impuestos. Según el analista del mercado eléctrico Francisco Valverde, un consumidor tipo con 4,4 kilovatios de potencia contratada y un consumo de 3.500 kWh al año ahorraría tan solo 1,5 euros en el recibo mensual de la luz con la anulación de este impuesto, y algo menos en primavera, cuando la electricidad suele ser más barata por la mayor presencia de renovables en el mix energético. Facua denuncia que el importe del recibo del usuario medio subió un 85,7% en 15 años, y reclamó una bajada del IVA del 21% al 4%. Ayer, el precio de la luz en el mercado mayorista marcó otro máximo anual, con una media de 75,93 euros el megavatio-hora.

millones de euros en 2030. Tras recordar que España arrastra 42 demandas de arbitraje internacional por un valor de unos 10.000 millones, la ministra ha destacado la necesidad de avanzar en un nuevo marco regulatorio que corrija un sistema obsoleto, sobredimensionado en costes fijos, que se basa en un mercado marginalista y que hace que tecnologías minoritarias marquen el precio de todas y una financiación de las infraestructuras que genera más costes.

**JDA**

Incorpora Econrol, consultoría de I+D+i

■ La firma de servicios de consultoría y asesoría jurídica JDA ha adquirido Econrol, una firma especializada en I+D+i con 25 años de experiencia en asesorar en la búsqueda de financiación, ayudas y subvenciones para la innovación empresarial. JDA cuenta con 100 profesionales y oficinas en Granollers, Barcelona y Sabadell. Su director general, Joan Díaz, asegura que incorporará así un servicio diferencial y de alto valor. / Redacción



NEGOCIOS & INNOVACIÓN START-UP | Medio ambiente

Investigación universitaria para soluciones reales

Aeris es una 'spin-off' de la Universidad Autónoma de Barcelona que aplica soluciones biológicas y sostenibles en el tratamiento de las aguas y del aire, en una apuesta por la sostenibilidad ambiental y la economía circular



P. M.

Aeris es una *spin-off* del grupo de investigación GENOCOV de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ofrecen soluciones ambientales a medida en depuración de aguas, tratamiento de aire y desulfuración de biogás, en una apuesta por la economía circular y la sostenibilidad medioambiental.

“Como grupo de investigación, llevábamos muchos años viendo que los sistemas biológicos de depuración de agua, aire y biogás tenían cierto interés en el mercado”, explica el director de Aeris, el doctor Óscar J. Prado Rubianes. “Había muchas entidades interesadas que acudían a nosotros para poner en práctica nuestras tecnologías a nivel industrial y nos dimos cuenta de que hacerlo como grupo de investigación no era la forma más eficaz de transferir el conocimiento de la universidad al

mercado”, recuerda el experto. Por este motivo, en 2009, crearon Aeris con 11 socios, todos profesores y doctores ingenieros de la UAB y de la Universidad Politécnica de Catalunya.

AGUA SOSTENIBLE

El sector del agua es uno de los que más retos de futuro tienen. Las cuencas catalanas sufren de estrés hídrico y se debe trabajar para garantizar el abastecimiento de agua en los próximos años, de modo que el nuevo modelo debería tender hacia la economía circular, en la que el recurso se trate de una manera sostenible y eficaz. “Como científicos e ingenieros, nuestra obligación es pensar y diseñar nuevos procesos que sean eficaces para la descontaminación y aprovechamiento de los recursos naturales, que impliquen un menor consumo de reactivos y de energía. También pienso que debemos aprovechar nuestro conocimiento y vocación para influir en el desarrollo de una normativa más justa, y debemos transmitir a la sociedad la importancia del medio ambien-

Aeris es una ingeniería formada por expertos del grupo de investigación GENOCOV de la Universidad Autónoma de Barcelona. En la imagen, Óscar J. Prado y Josep Torà, fundadores.

te”, afirma el doctor Prado. En este sentido, “las tendencias actuales en cuanto al agua son la combinación de herramientas biológicas y físico-químicas y, a la vez, desarrollar nuevas tecnologías que sean lo más eficaces, robustas y económicas posibles”.

Las soluciones que ofrece Aeris se enfocan en reducir al mínimo el consumo de reactivos y energía, y en maximizar la eficacia. “Apostamos muy fuerte por los sistemas biológicos”, explica el experto. Por este motivo, entre las propuestas de la empresa están los sistemas validados para el tratamiento de altas cargas de DQO (materia orgánica) y nutrientes, de las aguas industriales... buscando siempre la reutilización, uno de los grandes retos del sector. “En España depuramos ahora cuatro kilómetros cúbicos al año, pero solo reutilizamos apenas un 10%. Tenemos mucho margen de mejora. Eso supondría que tendríamos menos dependencia de las desalinizadoras, de los trasvases... La reutilización

“Las tendencias actuales son la combinación de herramientas biológicas y físico-químicas, y desarrollar tecnologías que sean eficaces, robustas y económicas”

en España está legislada por un real decreto que regula los usos del agua regenerada dependiendo de su calidad pero, ahora mismo, disponemos de tecnologías para conseguir que el agua más contaminada que puedas imaginarte llegue a un nivel hasta de agua potable. Sin embargo, cuando introduces el factor económico, no es rentable y pensamos en otros usos”, según Prado.

En el marco de la economía circular, la tecnología de Aeris, además, podría convertir las depuradoras en productoras de gas, de modo que no solo gastarían recursos sino que los generarían. “Estaríamos hablando de producir gas a partir de la materia orgánica que llega a las depuradoras. A través de un proceso biológico, podemos convertirla en biogás que debe someterse a una serie de procesos que nos permiten producir electricidad o calor”, explica el doctor Prado. “Implica un cambio de paradigma interesantísimo porque podemos hacer que una depuradora deje de ser un sistema que se limite a descontaminar y convertirla en una industria que, en vez de consumir, produzca recursos como el biogás, fertilizantes o compuestos de gran valor añadido como los biofertilizantes, los bioplásticos... Hay mucho trabajo de investigación pero en los últimos años se están dando pasos importantes”, concluye Prado.

TRIBUNA | EDUCACIÓN Los escándalos recientes relacionados con los másteres regalados no pueden sorprender en la comunidad educativa: es preciso reformar los órganos de gobierno universitarios y la forma en que se selecciona el profesorado.

Desdichas universitarias

JOSÉ ADOLFO DE AZCÁRRAGA

DIVERSOS ESCÁNDALOS han afectado recientemente a destacados políticos españoles que, en su día, obtuvieron títulos universitarios de forma (¿presuntamente?) irregular. Esto cuestiona, primero, la ética de los implicados. Pero también ha puesto en entredicho la calidad de alguna universidad sin distinguir entre sus centros e, incluso, la del propio Sistema Universitario Español (SUE), contribuyendo a un injusto desprestigio de una institución esencial para el futuro del país. Sin embargo, el SUE está repleto de magníficos centros, departamentos e institutos de renombre internacional. ¿Cómo se ha podido llegar hasta aquí?

Lo sucedido era previsible y los problemas reseñados –como otros– son antiguos y conocidos. Constituyen un claro ejemplo de cómo la pérdida progresiva del rigor intelectual que debe caracterizar a toda institución universitaria acaba minando su funcionamiento y su estructura. Este quebranto puede manifestarse por síntomas intrascendentes como, por ejemplo, que un calendario escolar indique «días lectivos sin clase» sin advertir el disparate, o que las webs ministeriales y universitarias hablen de «titulaciones» en lugar de títulos, como si la sonoridad añadida los hiciera mejores (las titulaciones son otra cosa). Pero también se produce por decisiones nefastas, como la imposición en 2007 por el entonces Ministerio de Educación, Política Social y Deporte de la versión 4+1 del Plan Bolonia (4 años de grado más el máster), forzando a las universidades a afrontar durante años una gigantesca y agotadora reestructuración de todos sus títulos. No sólo se desaprovechó la estructura 3+2 que ya tenía el SUE, sino que el 4+1 alejó académicamente a España de nuestro entorno, que siguió con el 3+2. Intereses gremiales aparte, ¿cuántas carreras de cuatro años deberían ser de tres?

Más aún, la propia palabra *grado* era inadecuada. Para empezar, debió hablarse de *licenciatura de cuatro años*. Pero no sólo el legislador fulminó con un insensible plumazo la histórica licenciatura, que viene del latín *licentia*, licencia (para ejercer) y que España llevó al

Nuevo Mundo, sino que cometió un error: obviamente no es lo mismo el grado de estupidez que la estupidez misma. Pero la verdadera importancia de detalles como éste es el grave problema de fondo que revelan: la insoportable levedad de muchos legisladores educativos y sus perniciosas consecuencias. Pues, como decía el Quijote, «la pluma es la lengua del alma: cuales fueren los conceptos que en ella se engendraren, tales serán sus escritos». Donde hay confusión, no cabe esperar orden.

De igual forma, cuando la legislación llevó la *nueva pedagogía* –de la que la enseñanza secundaria sigue sin reponerse– a la universidad, se produjeron graves daños colaterales. Hoy vivimos rodeados de *competencias, capacidades, herramientas, destrezas...* *Parole, pa-*

role... como cantaba Mina. Hasta las normas de los estudios de doctorado especifican doce (¡doce!) competencias, capacidades y destrezas que deben adornar a un doctor, aunque curiosamente son mucho menos detallistas con los requisitos que deben cumplir los miembros de los tribunales de tesis, más moldeables de lo debido. Como dijo Unamuno en 1913 en uno de sus «arabescos pedagógicos» sobre la escuela, a la que en estas cosas la universidad se va pareciendo cada día más, «hay una cierta pedagogía que... huye del verdadero trabajo... De ahí ha nacido el que [los niños] aprendan jugando, lo que acaba siempre por jugar a aprender. Y el maestro que les enseña juega, juega a enseñar. Y ni él, en rigor, enseña, ni ellos, en rigor, aprenden». Nuestros compulsivos competenciadores deberían leer *Amor y Pedagogía*. La *langue de bois* se ha adueñado de nuestras universidades; no sólo se ha perdido el norte, sino la rosa de los vientos. Afortunadamente, el auténtico profesorado resiste enseñando e investigando, atrincherado ante transversalidades, baremos ridículos y la hiperburocracia inútil que todo lo invade, sólo defendida por quienes hacen de ella su *modus vivendi*.

Esta frivolidad de la universidad, en la que sólo importa la apariencia, es esencial para entender el porqué de los recientes escándalos. Consideremos algunas cifras. En 2016, continuando el actual proceso inflacionario, había ya 84 universidades, 34 de ellas (¡34!) privadas: 1,8 universidades por millón de habitantes. El SUE ofrecía en 2015, en números redondos, unos 2.640 grados y 3.660 másteres oficiales (verificados por la ANECA); de ellos, 610 y 710, respectivamente, en las universidades privadas. Hay muchos más másteres que grados. En el curso 2006-07 obtuvieron un máster 5.590 alumnos. En el 2013-14 (no hay datos posteriores) doce veces esa cifra, 67.530; de ellos, 19.560 en las privadas. Estos números crecen al añadir los másteres *proprios* de las universidades, que éstas regulan directamente; su matrícula puede ser mucho más costosa y, además, sus profesores perciben sobresueldos por impartirlos.

El extraordinario crecimiento de los títulos ofrecidos y en especial de los másteres, permite concluir que su creación no siempre se debe a razones académicas; algunas universidades privadas son, además, menos estrictas. Es ilustrativa la distribución por áreas: aproximadamente, el 11% de los másteres *oficiales* corresponde a ciencias, el 15% a ciencias de la salud, el 22% a ingenierías y arquitectura y –nótese el salto– el 52% a ciencias sociales. Es evidente que detrás de numerosos másteres hay más negocio que rigor. Bastaría conocer los nombres de todos los másteres para confeccionar una *short-list* de sospechosos cuyo único destino es la pared de un despacho o a una línea en un *curriculum vitae*.

La sociedad española puede haberse sorprendido al conocer la existencia de títulos fraudulentos y tribunales *ad hoc* a través de los medios de comunicación. Pero es difícil imaginar que las autoridades universitarias desconocieran tales irregularidades, por lo que cabe preguntarse por qué no las cortaron en seco. Las universidades no suelen informar con rigor sobre los asuntos que no les son favorables, ni tampoco la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). Por ejemplo, se insiste en la gran calidad global de las universidades, obviando que el SUE carece del nivel esperable para la decimotercera potencia económica mundial (FMI). En los últimos años, ninguna universidad española aparecía entre

las doscientas mejores del mundo en el ránking de Shanghai. Este 2018 hay una, la de Barcelona; sin embargo, un país como Bélgica tiene cuatro.

ANTE ESTA INDISCUTIBLE realidad, la CRUE se escuda tras la falta de financiación y de autonomía. Ciertamente la universidad española, como la enseñanza en general y la I+D, está mal financiada. Pero las universidades públicas podrían mejorar mucho sin gastar un euro adicional usando bien la autonomía de que disponen, aunque desgraciadamente su sistema de gobierno lo hace casi imposible. Como decía Cajal ihace 120 años: «El problema principal de nuestra Universidad no es la independencia, sino la transformación radical y definitiva de la aptitud y del ideario de la comunidad docente. Y hay pocos hombres que puedan ser cirujanos de sí mismos. El bisturí salvador debe ser manejado por otros». Pues, al margen de la deficiente y vergonzosamente endogámica selección del profesorado –otra falta de rigor– el gran problema de las universidades públicas es, precisamente, su sistema de gobierno (no *gobernanza, please*, que es otra cosa).

¿Qué hacer? Parece que ahora los rectores (la CRUE) favorecerían una nueva ley de universidades. Bueno será recordar preventivamente que el indiscutible progreso de las públicas desde la llegada de la democracia se ha debido, primero, a la sociedad que las financia con sus impuestos y, después, al esfuerzo de su mejor profesorado. No, desde luego, a su sistema de gobierno, casi siempre corporativista y autogestionario, pues en rea-



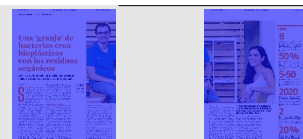
RAÚL ARIAS

«Las autoridades universitarias no podían desconocer los títulos fraudulentos y los tribunales ‘ad hoc’»

lidad sólo rinde cuentas ante sí mismo. Creer, por ejemplo, que los actuales claustreros universitarios, donde prevalece el *¿qué hay de lo mío?*, realizan el control adecuado es ilusorio.

También conviene insistir en que la CRUE está formada por los rectores de las universidades y no por éstas, como subrepticamente nos sugiere cuando encabeza sus escritos simplemente por *CRUE-Universidades Españolas* omitiendo indicar –no hay puntada sin hilo– lo que significa *CRUE*. En cualquier caso, si el sistema de gobierno universitario hubiera tenido hoy la estructura que en 2013 propuso el Informe del Comité de Expertos para la Reforma del Sistema Universitario, habría sido notablemente más difícil que se produjeran hechos como los referidos (y otros). Quizá sea éste un buen momento para releerlo con menos prejuicios; el tiempo pone todo y a todos en su sitio.

José Adolfo de Azcárraga es profesor emérito de la Universidad de Valencia y miembro del IFIC (CSIC-UV). Perteneció al Comité de Expertos para la Reforma del Sistema Universitario Español que emitió su Informe el 12-II-2013.



Una 'granja' de bacterias crea bioplásticos con los residuos orgánicos

VEnvirotech resuelve el problema de la contaminación del agua por plásticos y crea valor con los deshechos gracias a la tecnología

Pilar Maurell

Sostenibilidad, eficiencia y economía circular son conceptos que se han puesto de moda, que se pueden aplicar a cualquier sector y que, en el futuro inmediato, serán una necesidad. El ámbito del agua es uno de los que más preocupan, ya sea por la contaminación de mares y ríos o por la necesidad de garantizar agua para todos en el futuro. Patricia Aymà y Noelia Márquez fundaron VEnvirotech, una *start-up* que resuelve dos problemas acuciantes. “Somos una empresa biotecnológica que se dedica a transformar residuos orgánicos de empresas agroalimentarias industriales en bioplásticos”, explica Aymà, biotecnóloga. De momento ya trabajan para Bon Area y Repsol, y colaboran con empresas del sector del plástico.

Su proyecto se asemeja a una granja, solo que la suya es de bacterias. “Preparamos el residuo para que pueda comérselo una bacteria. Una vez está dentro de una planta que instalamos nosotros mismos, provocamos que estas bacterias se coman el residuo y, a la vez, acumulen en su interior una reserva energética. Esa reserva, si se extrae y se caracteriza, tiene las mismas características que el plástico proveniente del petróleo. Es decir, provocamos que las bacterias acumulen este plástico que extraemos, transformamos y procesamos”, resume Aymà. El resultado de todo el proceso es “un plástico biodegradable en el medio ambiente y compatible con el cuerpo humano”.

Oriol Güell, socio de la empresa, doctor en Química y Física y especialista en polímeros

explica que este plástico, tratado de diferentes formas, puede utilizarse en el *packaging*, en productos de un solo uso o en biomedicina. “Puedes usarlo como la base de una fórmula o mezclarlo con plásticos provenientes del petróleo para que las formulaciones sean más sostenibles”. En el caso de una cañita para beber, producida con este tipo de plástico, cuando vuelve al medio se degrada. “Eso significa que el polímero se rompe y pasa a ser alimento de las bacterias que hay en la naturaleza”, afirma Aymà.

FOCO EN EL MODELO DE NEGOCIO

El proyecto surgió hace dos años y medio cuando Patricia Aymà desarrolló su tesis en la Universidad de Barcelona. Estaba en un máster de Ingeniería Ambiental, “estudiando este tipo de procesos y vi que era fácil, pero que faltaba un modelo de negocio y que esta tecnología solucionara problemas reales. Una vez estudiada la tecnología y ver que era rentable a nivel de costes y beneficios, fui al programa Explorer del Banco Santander”. Allí se enfocaron en el modelo de negocio: “Hay empresas agroalimentarias que pagan entre 60 y 100 euros la tonelada para gestionar sus residuos orgánicos. Nosotros ofrecemos una tecnología para eliminar estos residuos que trabaja en casa del cliente. Además, si a eso le sumamos que producimos un producto con alto valor añadido, pueden ahorrar entre un 40 y un 70% en la gestión de residuos”, explica Aymà.

VEnvirotech diseña y modeliza plantas de producción adaptadas al residuo de cada cliente. Actúan como una depuradora donde modifican el entorno de la bacteria para que, a la vez que se come el residuo, produzca el

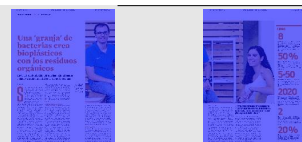
Patricia Aymà y Oriol Güell, fundadora y socio del VEnvirotech, una 'start-up' que revaloriza los residuos convirtiéndolos en bioplásticos.



polímero. “Es como una granja de bacterias”, lo resume Aymà, “los resultados son que por una parte nos queda agua limpia y por otra tenemos un procesado con una bacteria que tiene un plástico. Extraemos ese plástico de la bacteria y pactamos un precio de venta con el productor del bioplástico que es el que tiene el residuo”, resume la biotecnóloga. “Producimos bioplástico con una fuente muy barata y podemos venderlo a un precio de 1 a 3 euros el quilo, cuando actualmente cuesta entre 5 y 6 euros por quilo. Incluso podemos competir con el plástico procedente del petróleo”.

REDUCIR COSTES

La diferencia respecto a sus competidores que también producen bioplástico es que estos “utilizan organismos modificados genéticamente que tienen mucha productividad y pueden dar demanda al mercado, pero la bacteria necesita un entorno esterilizado, la producción es discontinua y los costes son tan altos que hacen que este tipo de bioplásticos no tengan muchas aplicaciones en el mercado



Claudio Valdés

porque es caro”.

En VEnvirotech tienen diferentes tipos de cliente, uno como Bon Area, que produce muchos residuos y necesita aplicar plástico en el proceso de producción porque empaqueta alimentos. Con ellos pactan un canon por el uso de este plástico. Otros que generan residuos y ellos les compran el plástico para venderlo. Y unos terceros que solo necesitan el plástico.

A quienes producen residuos, VEnvirotech les instala una planta de reciclaje y se asegura de su mantenimiento con un técnico de zona. Las plantas se construyen en un contenedor de 15m² que se traslada a casa del cliente. Con ello, “protegemos la tecnología y facilitamos el trabajo de los operarios, que solo deben poner el residuo por la parte de la entrada, que es una trituradora”, explica Aymà.

En los primeros meses, a Aymà y sus compañeros les costó arrancar. Necesitaban una inversión inicial fuerte y “nos sorprendió que hubiera empresas que, en su momento, no quisieran participar”, recuerda una de las fundadoras del proyecto. Pero al entrar en el

#“Producimos bioplástico con una fuente muy barata y podemos venderlo a un precio de 1 a 3 euros el quilo. Incluso podemos competir con el plástico procedente del petróleo”.

programa Explorer, lograron una mayor visibilidad. “Acabamos de cerrar una ronda de inversión de 300.000 euros, estamos en el fondo de emprendedores de Repsol y tenemos 72.000 euros cada año durante dos. Recuerdo que en la formación del Santander nos decían que para que triunfara una empresa el factor crucial era el momento y creo que nosotros llegamos justo a tiempo”, asegura Aymà.

En estos momentos, VEnvirotech está haciendo las pruebas industriales, pero “nuestra estrategia es crear una red de productores de residuos que puedan tener nuestras plantas instaladas y generar con eso una demanda de bioplásticos”, explica Aymà que reconoce que “la transición de los plásticos procedentes del petróleo a los bioplásticos será lenta”.

CIFRAS

8

millones de toneladas de basura al año llegan a los mares y océanos. Es el equivalente al peso de 800 Torre Eiffel o de 14.285 aviones Airbus A380e. Esta cantidad de basura cubriría 34 veces la isla de Manhattan, en Nueva York. Además, cada segundo más de 200 kilos de basura van a parar a los océanos.

50%

En España, el 50% de los plásticos que llegan a los sistemas de gestión de residuos terminan en los vertederos sin ser reciclados. Por otra parte, cada día se abandonan 30 millones de latas y botellas en nuestro país, según los datos que maneja Greenpeace.

5-50

Se desconoce la cantidad exacta de plásticos en los mares pero se estiman unos 5-50 billones de fragmentos de plástico, sin incluir los trozos que hay en el fondo marino o en las playas. El 80% proviene de tierra.

2020

Los investigadores estiman que en el año 2020 el ritmo de producción de plásticos habrá aumentado un 900% con respecto a los niveles de 1980 (más de 500 millones de toneladas anuales). La mitad de este incremento se producirá tan solo en la última década, según revela Greenpeace en sus informes.

2

En España se generan al año unos 2 millones de toneladas de residuos animales. Según la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE), el cárnico es el cuarto sector industrial español, y está constituido por alrededor de 3.000 pymes.

20%

El mercado internacional de bioplásticos crecerá un 20% en 5 años. La capacidad de producción mundial de bioplásticos llegará a aproximadamente 2,44 millones de toneladas en 2022.

Repsol se diversifica con sus gasolineras

Repsol presenta un ambicioso plan de crecimiento para sus franquicias Supercor Stop & Go, que posee en alianza con El Corte Inglés. En concreto, pretende pasar de los 75 puntos de ventas actuales a más de 1.000 en solo tres años. De esta forma la petrolera ahonda en su adecuada estrategia de incrementar los servicios que ya ofrece en sus gasolineras, lo que es positivo ya que de esa forma se diferencia de las estaciones de baja coste. Pero además la alianza con los grandes almacenes tiene otras ventajas añadidas para Repsol. De hecho, la firma quiere aprovechar el millón de visitantes que cada día acuden a sus 3.500 gasolineras para reforzar su potencia comercial, tanto en electricidad y gas como también en butano. De ahí que estas tiendas de proximidad supongan un excelente escaparate para que Repsol diversifique su negocio y reduzca su dependencia del crudo.



Iberdrola reclama al Gobierno que no penalice las renovables

CARLOS MOLINA
MADRID

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, reclamó ayer al Ejecutivo que no se penalice en las próximas regulaciones “a los que apostaron por el futuro en beneficio de los que durante años no hicieron nada y siguieron anclados en el pasado”. Con esta frase, Sánchez Galán instó a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a que no perjudique a las renovables frente al gas y al carbón. El grupo energético es el que más ha invertido en energías renovables y el que más activos tiene en su cartera. Iberdrola es el primer productor eólico en Europa y Reino Unido y el tercero en EE UU, según la propia compañía. “No tapemos los agujeros del pasado, sino construyamos cosas que nos lleven al futuro: más generación limpia, más redes eléctricas flexibles, más almacenamiento de energía e internacionalización”. Al margen de su inte-

rés propio, Sánchez Galán destacó que la transformación del modelo energético hacia fuentes más limpias y alejadas de los combustibles fósiles pueden generar inversiones en España de entre 70.000 y 100.000 millones de euros.

“Es una oportunidad impresionante que no podemos despreciar en aras del cortoplacismo, de situaciones puntuales para hacer que aquellos que no hicieron los deberes puedan seguir ordeñando, y nunca mejor dicho, sus activos. Son necesarios marcos políticos incentivadores y señales claras que incentiven que esto se va a producir de esta manera. También es necesario estabilidad y predictibilidad”, aseguró en un desayuno organizado por Diálogos para la Democracia, al que también asistió la ministra de Industria, Reyes Maroto. Sánchez Galán se mostró satisfecho con la recuperación del Ministerio de Industria, vital, en su opinión, para la reindustrialización de España.



La ministra de Industria, Reyes Maroto, conversa con el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, en presencia del ex ministro de Industria Miguel Sebastián, ayer. P. MONGE



Josu Jon Imaz
CONSEJERO DELEGADO REPSOL

Alianza provechosa
Repsol lleva más allá su alianza con El Corte Inglés y pretende alcanzar 1.000 tiendas en sus gasolineras en tres años. Con ello la petrolera obtiene una herramienta perfecta para impulsar la diversificación de su negocio.



Operaciones

Cepsa tiene listo su debut en la Bolsa española para el próximo 18 de octubre

La prospección de la demanda ya ha comenzado entre los grandes fondos

El calendario prevé que el folleto esté a inicios del próximo mes

PABLO M. SIMÓN
MADRID

Cepsa ya dispone de un calendario tentativo para realizar su redbut en la Bolsa. Su objetivo es estrenarse el jueves 18 de octubre. Aunque la fecha no está escrita en piedra, pues depende de factores que no pueden controlar desde la petrolera que preside Suhail Al Mazrouei.

Las presentaciones preliminares entre inversores (*investor education*, en la jerga) arrancaron el pasado lunes 17, después de publicar el documento que oficializa el objetivo de la petrolera de volver a cotizar (*intention to float* o ITF). Ya antes, los bancos encargados del reestreno se habían puesto a trabajar, con diversos encuentros en Londres, París y varias ciudades de Estados Unidos.

La misión es que se coloque en Bolsa al menos el 25% del capital de Cepsa. Este sería el porcentaje que cotizaría libremente, si bien los planes pasan por elevarlo a entre el 30% y el 40%.

También existe la posibilidad de que se dé entrada a inversores ancla (*anchor investors*, en la nomenclatura de la salida a Bolsa), que deberían aparecer en el folleto, o que se les haga hueco directamente en el libro de órdenes sin necesidad de aparecer previamente en ningún documento. En este último caso, la denominación en este lenguaje de este socio sería la de *cornerstone*.

Apollo, CVC, Carlyle, Macquarie y otras firmas con perfil industrial como Vitol, una firma energética especializada en *trading* de petróleo, se han interesado en el proceso de venta de la mano de Rothschild.



Suhail Mohamed al-Mazrouei, presidente de Cepsa y ministro de Energía de Emiratos Árabes Unidos. EFE

Fuerte dividendo

- **Promesas de futuro.** Cepsa, en la presentación a analistas de finales de julio, explicó que destinará unos 450 millones de euros en dividendos el próximo año y que este importe crecerá a un ritmo anual del 5%. Este importe implicaría una rentabilidad por dividendo del 4,5% para la tasación más baja de la banda preliminar.

- **El pasado.** Cepsa ha entregado en dividendos entre el 55% y el 97% de sus beneficios desde 2009, con más de un euro por acción desde 2011. Abu Dabi entró en Cepsa en 1988 y elevó su participación hasta el 47% en 2009 con la compra de las acciones en poder de Santander (32,5%) y Fenosa (5%). IPIC adquirió los títulos a 33 euros cada uno. Este precio suponía una tasación de 8.800 millones para el total. En 2011, compró casi el 49% que Total tenía en Cepsa a 28 euros por acción, lo que valoraba el 100% en unos 7.500 millones, y lanzó una opa de exclusión.

Blackstone, que también se interesó, finalmente decidió no presentar oferta.

Las valoraciones iniciales de entre 10.000 y 15.000 millones de euros se han moderado ahora y apuntan hacia la parte baja de este rango, si bien entre los informes de los bancos de inversión hay opiniones más y menos optimistas. Rothschild es el jefe de los asesores, mientras que Bank of America Merrill Lynch, Santander, Citi y Morgan Stanley son los coordinadores de la salida a Bolsa. Los despachos Clifford Chance y Allen & Overy se encargan de la parte legal.

En un segundo escalón, también están empleándose a fondo los equipos de Barclays, BNP Paribas, First Abu Dhabi Bank, Société Générale y UBS y, en un tercer puesto, BBVA y CaixaBank.

El plazo mínimo desde que se da a conocer el anuncio de salir a Bolsa y se publica el folleto oficial suele ser de 15 días. Esto implicaría que el documento registrado en la CNMV debería estar listo en la primera semana de octubre. Usualmente los jueves se reúne el comité ejecutivo del supervisor que preside Sebastián Albella, capacitado para aprobar los folletos de salida a Bolsa. Así, la fecha más probable de esa semana para recibir el visto bueno sería el 4 de octubre. No obstante, este órgano de la CNMV tiene

potestad para reunirse cualquier otro día y solo le dará luz verde si está toda la información necesaria.

El proceso habitual es que desde la publicación del folleto hasta el debut pasen al menos dos semanas. Este es el periodo de presentaciones oficiales entre los potenciales compradores, que además expresan su deseo de acudir a la operación y los precios a los que están dispuestos a comprar. Los bancos encargados de la salida a Bolsa configuran así el libro de órdenes, y en función de la cantidad y la calidad se fijará el precio, en general dos días hábiles antes del estreno en el mercado.

La compañía permitirá a una serie de empleados en España que cumplan determinadas características acudir a la oferta, como publicó **CincoDías** el pasado 7 de septiembre. En el país, Cepsa cuenta con alrededor de 8.500 trabajadores. El porcentaje de las acciones que se les ha reservado es del 0,2% de importe total. Podrán comprar con descuento, aun no fijado pero que oscilará previsiblemente entre el 5% y el 10%, según fuentes conocedoras de la operación. Es la primera vez que una operación de este tipo incluye un tramo específico para los trabajadores desde la salida a Bolsa de Aena en febrero de 2015.